

Política y protesta social en las provincias argentinas

Orietta Favaro*, Graciela Iuorno** y Horacio Cao***

Presentar para entender

El tema de la política y la protesta social en la Argentina democrática contemporánea cuenta con abundantes, ricos y variados estudios. No obstante, son pocos los trabajos que hacen referencia a acciones colectivas en las provincias argentinas, ya que la mayoría de ellos estudian casos particulares dentro del área pampeana.

En este sentido, pretendemos realizar un aporte que enriquezca y permita la discusión sobre el tema, a partir del estudio de la política y la protesta social en algunas unidades subnacionales¹ (Neuquén, Río Negro y San Juan), estados en los cuales se desarrollan dimensiones particulares en las formas de hacer política y en los movimientos de protesta. De la misma manera, vale destacar que se trata de situaciones especialmente favorables para el análisis, ya que en los momentos en que las acciones colectivas toman el centro de la escena política, se manifiestan con particular nitidez ciertos clivajes y relaciones de poder que suelen quedar ocultos en la práctica cotidiana.

En cuanto a los contenidos en sí, digamos que las situaciones planteadas llevan a que a lo largo del escrito se utilicen instrumentos diferentes a los usados más comúnmente para aprehender la conflictividad social, como así también que se dirigen al estudio de hechos que tienen escasos antecedentes de investigación. En este punto se encuentra buena parte de su originalidad, así como los principales desafíos que debe superar.

En definitiva, nuestra propuesta pretende acercar algunas reflexiones, seleccionando algunos acontecimientos puntuales que permiten la acción colectiva, en tres estados argentinos, sobre los cuales nos interesa mostrar la diversidad en cuanto a la identidad, la estructura, la demanda, el impacto, etc. que la respuesta de la ciudadanía provoca, reconfigurando la producción y reproducción territorial y simbólica de las unidades de análisis.

Contextuar para explicar

Como señala Lechner, no es lo mismo tener democracia que gobernar democráticamente; por ello, la atención es necesario centrarla en la política, ya que no sólo tiene que ver con quien gobierna y cómo se decide, sino en entender que hay un redimensionamiento del Estado, una preeminencia de la democracia liberal y que “no sólo cambia el contexto de la política, sino la política misma” y los cambios se realizan “en la manera de hacer y pensar la política” (Lechner, 1996: 104-108). Hay un proceso de complejidad social, con nuevos sujetos, nuevas demandas, nuevos espacios que, en definitiva, sirven de anclaje a nuevas identidades colectivas. La política pierde centralidad, está entredicho, ya no opera como antes y es necesario ciudadanizarla. Es decir, al descentrarse el lugar de la política, la organización social ocupa su lugar, con una fuerte crisis de representación en la que emergen liderazgos que arman “consensos” y gobiernan tomando distancia de los partidos, en el medio de una tensión entre la tradición y el cambio. Por ello, existe una fuerte vinculación entre las protestas sociales y la representación partidaria, pues la articulación entre lo político y lo social sufre cambios, se desactivan las organizaciones de masas, la militancia se profesionaliza o dispersa, el interés ciudadano disminuye, cada vez incide más la opinión pública, interpelada permanentemente por los medios de comunicación. Medios que con sus políticas *legítimas* la asistencia social, la pobreza, el clientelismo, etc. Dicho de otro modo, la crisis de representación política se está dando en el interior de los partidos en

los que en algunos casos, se produce una doble competencia partidaria, esto es, en el interior del partido se tiende a actuar como sistema político en sí mismo, creando su propia oposición (Novaro, 1998: 119), tal es el caso de una de las provincias de nuestro estudio.

Asimismo, hay otras condiciones objetivas en el propio modelo argentino de relaciones laborales construido y legitimado durante cuarenta años, que permite la emergencia de un sindicalismo tradicional, de tipo corporativo, sosteniendo la relación entre el estado y el empresario. Esta relación permite la construcción de la identidad y solidaridad entre los asalariados en la sociedad argentina, que se derrumba primero con las políticas de la dictadura (Novaro y Palermo, 2003: 220-261) y luego con las de los noventa (Basualdo y Azpiazu, 2002: 26). Estos procesos, agrupados bajo la genérica denominación de *ajuste estructural*, inducen una reestructuración regresiva, que en el área central tiene como protagonista principal la disgregación del sector secundario a partir de la cual se organiza un nuevo polo de poder hegemónico conformado por un conjunto reducido de grandes agentes económicos (grupos económicos, bancos extranjeros y empresas transnacionales), que adquieren posición dominante en sectores estratégicos de la economía nacional.

En el resto del país se desarrollan procesos en alguna medida paralelos, pero que presentan algunas características propias. Así, para el análisis de la situación en las provincias de la periferia o del área despoblada, es crucial estudiar la desestructuración de las llamadas economías regionales, emprendimientos agroindustriales que en muchas jurisdicciones tenían un protagonismo excluyente dentro del aparato productivo provincial. De igual forma, la privatización de algunas empresas (un caso emblemático es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF) significa la desaparición lisa y llana de toda una red de poblaciones que viven bajo su amparo. En los estudios de caso se citan con algún detalle cómo impactan estos procesos en la vida social y política de las provincias bajo análisis.

Un rasgo común a todas las áreas que componen el país es la pulverización del mercado de trabajo bajo las características que se lo conoce durante buena parte del siglo XX. Así, del pleno empleo se pasa a niveles en donde la subocupación y la desocupación abierta afectan a casi la mitad de la población demandante. Es otras palabras, la valorización del capital pasa del industrial al financiero, probando una reestructuración regresiva del sector secundario en su conjunto, con endeudamiento externo, un sesgo fuertemente antiindustrialista, que opera en la desaparición de la industria como motor de crecimiento, baja de los niveles de empleo en sectores primarios y secundarios, y un incremento del terciario y de la construcción. Y fundamentalmente, la *centralidad de las privatizaciones en la conformación de la comunidad de negocios*, ya que se transfieren a un conjunto reducido de grandes agentes económicos (grupos económicos, bancos extranjeros y empresas transnacionales), las principales compañías estatales, otorgándoles poder en el mercado y en sectores estratégicos. Por ello, se conforma una comunidad de negocios entre los actores más importantes de la economía interna y acreedores externos, ahora sí, con capacidad para influir sobre el sistema político. De este modo, el trabajo –primer lazo que integra las personas a la sociedad, a la vez que medio de subsistencia– desaparece. La desocupación abierta afecta a la mitad de la población económica activa. A ello hay que agregar el proceso de devaluación en el marco de la disputa abierta en 1999 al interior del bloque dominante entre las distintas fracciones, que forja la década del noventa, intensifica y agrava el proceso que se describe, mostrando a una sociedad fragmentada, con amplios sectores excluidos, pobreza y una evolución descendente de la movilidad social.

La situación planteada se observa con mayor o menor intensidad a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Las provincias son los territorios donde se comienza a dar largas luchas, abiertas o subterráneas; respuestas estratégicas de los sectores populares a la desterritorialización productiva. Así, cada sujeto social, desde sus territorios, pone en marcha acciones colectivas que revisten diferentes formas, algunas tradicionales como las huelgas, otras nuevas –acampadas, batucadas, radios abiertas, cortes de rutas, recupero de fábricas, movilizaciones, escraches, marchas, protestas, piquetes, suspensión de remates, tractorazos, ocupación de tierras, etc.–, que agrupan a sujetos de todas las clases sociales, en particular, de los sectores populares, en un intento de arraigo a espacios recuperados.

Definir para comprender

Adoptaremos la definición de acción colectiva de protesta (Giarracca et al., 2002) para caracterizar la protesta social que se desarrolla en las provincias, a partir de estudios de caso como estrategia metodológica. Se trata de un fenómeno de activación de la política en las calles por parte de sujetos sociales excluidos o al borde del sistema que la utilizan como canal de emergencia y medio efectivo para interpelar el poder. Ahora bien, ¿cuáles son los marcos de esas acciones? Movilizan nuevos y viejos sujetos sociales, con valores, símbolos que existen en la sociedad que ellos reelaboran para consolidar la unidad y la identidad del grupo, lo que hace a un cambio también en la cultura política (López Maya, 2002: 15-32).

Son las luchas de los *sin*: sin trabajo, sin casa, sin tierra, sin papeles, etc. En general no son sólo luchas políticas, sino personales, sociales, culturales, y se traducen en formas organizativas diferentes a las que preceden a las luchas por la ciudadanía (Sousa Santos, 2001: 177-187). Se conforman en respuestas a las consecuencias de la oleada neoliberal que cambia las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y reproducción, territorial y simbólica (Zibechi, 2003: 185), ahora bien, estas luchas adquieren características específicas en las jurisdicciones que analizaremos. Adelantamos que, por ejemplo, en los ámbitos de la periferia el gasto del estado provincial en tanto elemento crucial para sostener un cierto nivel de actividad, empleo y demanda agregada, tiende a convertirse en el eje de la disputa social. Desde este principio, las luchas corren el peligro de ser cooptadas por el oficialismo provincial o los partidos opositores con mayor peso electoral, que se presentan como la herramienta apropiada para asignar o reasignar los recursos públicos.

En este aspecto, la “fuga de lo político a lo social”, concepto que expresa las dificultades que en la etapa presenta la estructura política formal para regular el conflicto social, tiene en las áreas extrapampeanas una connotación especial. Si bien esta estructura formal presenta, como en el resto del país, una aguda pérdida de consenso (aunque mantiene su eficiencia como maquinaria electoral), sigue siendo relevante en el ámbito de las pujas sociales, al guardarse para sí el elemento clave del gasto público.

En síntesis, la política deja de regular el conflicto social, de modo que permite el surgimiento de nuevas dimensiones, entendido como un conjunto de luchas en un momento dado, es decir que se necesita unificar las distintas manifestaciones de la conflictividad que marcan una coyuntura (Mouriaux et al., 2000: 120). La protesta, desde la teoría de la acción colectiva, encierra la realidad de una lucha entre dos sujetos por la apropiación y orientación de los valores sociales y de los recursos; no se agota en una sola manifestación, tienen períodos de latencia y explosión; es el recurso de los que no tienen poder o no están representados por formas tradicionales. Al inscribirse en el

espacio público, necesitan de un espectador y observador para su eficacia, por ello, intervienen fuertemente los medios masivos de comunicación que, de algún modo, los legitiman y obligan a los políticos a inscribir la temática en la agenda política provincial y tomar decisiones.

Estudios de casos

De la isla del bienestar a la política en las calles. Neuquén en las últimas décadas

Durante el período territorialiano (1884-1955), aunque comienzan a definirse las principales actividades económicas de Neuquén (Favaro et al., 1999: 29-54), se mantiene un ámbito heterogéneo con escaso desarrollo, desarticulado espacial y políticamente del orden nacional. La inserción de Neuquén al área económicamente dominante del país, litoral-pampa húmeda, como proveedor de recursos hidrocarburíferos y de hidroelectricidad, es un proceso lento y paralelo a la consolidación de su estado, al aumento de la población y a la definición del sistema político. Si bien antes de convertirse en provincia (1955) Neuquén ya explota el petróleo por la acción del Estado nacional a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, no permanece aquí la renta petrolera, es decir, el canon o regalía del 12% por el aprovechamiento del recurso. Desde 1958 en que se inicia como estado autónomo y con el primer gobierno constitucional, comienza la puja –Estado provincial-Estado nacional– por el beneficio de los recursos localizados en el área de competencia neuquina². Lentamente se dibuja la tendencia hacia la producción de petróleo, hecho contundente que se concreta en los años ochenta con el descubrimiento de yacimientos de gran significación para la producción y consiguientemente, para el aporte de regalías a la provincia. Paralelamente, es necesario recordar la relevancia que toma la norpatagonia debido a las obras financiadas por organismos internacionales, tal es el caso de El Chocón, que convierte a Neuquén en un referente al sur del río Colorado. De ser un área de subdesarrollo por su tasa de natalidad y mortalidad, pasa a convertirse en un espacio con grandes cambios cualitativos y cuantitativos, vinculados a la explotación de la energía y a la construcción, aparte de las centrales hidroeléctricas sobre el río Neuquén y Limay.

De este modo, durante los años ochenta, cuando funcionan a pleno las centrales hidroeléctricas, se intensifica la producción de petróleo y se asiste a un incremento sostenido en la producción gasífera, Neuquén es una provincia sin estrategia de desarrollo, aunque aporte el 45% del petróleo nacional y más del 50% del gas. Constituye la sexta provincia exportadora, luego de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Chubut y Santa Cruz; exportando petróleo y gas, y con socios comerciales como Chile y Brasil. Por ello, ni siquiera en el contexto de la devaluación es una provincia perjudicada; antes bien, es una instancia beneficiada por recibir sus ingresos dolarizados (regalías por venta de combustible al mercado interno), mientras que los gastos perduran en porcentajes pesificados. Cuenta con varios emprendimientos, y las regalías constituyen más de la mitad del presupuesto provincial, esto es, más de 700 millones de pesos (regalías petrolíferas)³, 270 millones de pesos (regalías gasíferas) y 25 millones de pesos (regalías hidroeléctricas) con un presupuesto provincial de aproximadamente 1.800 millones de pesos para el año 2004. El 40% de los ingresos cubren la masa salarial, es decir, el 100% del salario estatal (37.000 empleados). Si bien se establece que los tres sectores que más aportes recibirán son educación, salud y seguridad, está previsto realizar inversiones en obra pública y convocar inversiones de capitales⁴, la tensión entre empleados de la provincia y el emepenisismo es permanente.

En definitiva, es una provincia rica con población pobre, que no logra aún reconvertir la economía estructurada alrededor de la renta estatal que otorgan las regalías hidrocarbúrficas⁵. A pesar de lo impresionante que pueden lucir sus indicadores como el PBG provincial, que pasa del 22,1% en 1985, al 44,1% en 1995 y 66% en 2003. El aumento del desempleo, producto de la quiebra de la política benefactora y la privatización de las empresas públicas, es de un 20,9%, con una desocupación de 14,7% (2002)⁶.

No obstante, la instancia subnacional utiliza como principal mecanismo de su política pública el reciclaje de las regalías que adquieren un papel fundamental tanto en la acumulación territorial como en la asignación de recursos a la sociedad. El partido provincial –Movimiento Popular Neuquino (MPN)–, gobierna hace cuarenta años, tanto en momentos constitucionales como en épocas de gobiernos militares. Con el advenimiento de la democracia (1983), este partido-movimiento-estado⁷, que desde la década de 1990 vive en su interior una lucha facciosa entre dos líneas que giran alrededor de dos figuras, al comienzo la lucha es por espacios de poder, luego se deriva en proyectos de provincia (sapagistas-sobischistas). La lucha intrapartidaria no sólo divide al partido, sino también a la sociedad; mientras tanto la “oposición” asume cómoda el papel que le adjudica el hegemónico emepenismo⁸. A fines de los años noventa se retira de la contienda electoral el que fuera uno de los fundadores y principal referente del MPN durante décadas: Felipe Sapag. A partir de entonces, Jorge Sobisch, actual gobernador, es el presidente y principal dirigente del entramado local; ahora con un nuevo aditamento, su postulación a presidente de la nación. Su proyecto de poder se basa en “exportar el exitoso modelo neuquino” y ofrecer “triangular” la política, para que la sociedad tenga otra alternativa al radicalismo y al peronismo. Al momento de escribir el artículo, el gobernador neuquino continúa sin sobresaltos con su proyecto, mientras tanto, se intenta articular en la escena política de la provincia una coalición opositora, “Alternativa Neuquina”, integrada por dirigentes políticos e intendentes no emepenistas de las localidades neuquinas del resto de los partidos políticos nacionales en su versión local, pergeñando una propuesta integradora y alternativa al MPN para el año 2007.

Las protestas

Las huelgas, movilizaciones, marchas, protestas, puebladas, cortes de ruta, etc., no comienzan en Neuquén con las puebladas cutralquenses de 1996 y 1997, aunque por instancia de los medios de comunicación, son ampliamente conocidas, difundidas e imitadas algunas de las estrategias allí empleadas por los nuevos sujetos sociales: los piqueteros. En efecto, no es motivo de esta presentación hacer un análisis acerca de la heterogeneidad espacial, poblacional, cultural, que no condice con la *homogeneidad política* y con el modelo económico imperante en Neuquén. La sociedad neuquina es producto de las migraciones internas más que del crecimiento vegetativo, que multiplica 27 veces su población entre 1895 y 1991, aunque la participación relativa de la provincia en el total nacional es de sólo 1%. El proceso de urbanización a partir de la década del setenta, más las actividades económicas en Neuquén: petróleo, gas, hidroelectricidad, estimulan una fuerte inmigración desde otras provincias (Favaro, 2002: 110-112). Durante la dictadura iniciada en 1976, Neuquén se convierte en un espacio receptor de *exiliados internos*, de modo que, militantes políticos y gremiales de grandes ciudades se instalan tanto en la capital como en el interior del estado local, integrándose al *paraguas* de protección que tiende la iglesia y Monseñor De Nevares.

Cuando se quiebra el régimen de acumulación nacional basado en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y el mercado interno, al cual la provincia se había integrado tardíamente, la crisis desnuda con crudeza la situación social y económica de la provincia, pasando de ser una isla caracterizada por el bienestar de su población, a convertirse en un archipiélago de conflictos. Esta situación asoma casi cotidianamente y los sujetos que protestan tienen como referentes a las organizaciones sindicales, nucleadas en ATE dentro de la CTA⁹ y algunas agrupaciones de izquierda. Son las que muestran la mayor capacidad de resistencia y convocatoria y, aunque no es posible afirmar la existencia de coincidencias ideológicas, las acciones de los dirigentes sindicales son consecuentes con la defensa de los derechos sectoriales de los trabajadores ocupados y desocupados, si bien aquellos continúan con una fuerte vocación demandista al estado neuquino, resultado del modelo clientelar, y beneficiarios, en más de una oportunidad, de las prácticas políticas del empenismo¹⁰. Recordemos que el Estado-partido del gobierno genera un estilo de gestión estatal y modalidad de acción que constituye el motor de la matriz societal neuquina. El MPN opera con permanente disposición de concertar con el gobierno nacional y, en muchos casos, con los sindicatos y dirigentes que conducen la movilización social en la provincia, ya que en coyunturas como la actual, al tratar de instalarse en el escenario nacional, no es conveniente mostrar una provincia con conflictos o grado de ingobernabilidad.

Sin embargo, no siempre es así. Neuquén es escenario de movimientos, protestas y conflictos que trascienden sus fronteras, tal es el caso de la huelga petrolera de 1958 y del denominado Choconazo (1969-1970) en el contexto político del onganato [dictadura de Juan Carlos Onganía, 1966-1969]. En la presente propuesta se reflexiona de modo detenido sobre dos hechos que resultan centrales en la historia de los conflictos en Neuquén de las últimas décadas, aunque se hace referencia a la situación de conflicto general de los años noventa. Por una parte, la pueblada cutralquense y, por otro lado, el conflicto docente que deriva en la segunda pueblada en las ex localidades petroleras. En este orden, es necesario recordar que la instancia local desarrolla sus bases sociales y materiales dependiendo ampliamente del gasto público y del estado central. Los cambios en la economía nacional, el ajuste, los pactos fiscales desfavorables a las provincias y la desregulación producen desequilibrios que desnudan su debilidad estructural y muestran la necesidad de generar modificaciones tanto en la sociedad como en la economía. Hasta la privatización de YPF (1991), la modalidad “benefactora” de la empresa estatal en localidades como Plaza Huincul y Cutral-Co (a 100 km de la ciudad capital de Neuquén) oscurece la percepción de la crisis. El proceso de privatización, uno de los aspectos más importantes de la denominada “reforma de estado”, desarticula empresas públicas que, como la petrolera (Favaro, 1998), aseguran la socialización territorial en términos de contención de las dinámicas regionales y se inscribe, además, en el marco de la lucha facciosa en el interior del partido provincial (Favaro y Arias Bucciarelli, 1994: 88-100).

Las protestas cutralquenses se materializan en dos momentos, que permiten a su vez, la emergencia de sujetos sociales diferenciales. La ruptura por parte de Felipe Sapag – entonces gobernador de Neuquén– de las relaciones con la empresa canadiense Agrium para la instalación de una planta de fertilizantes en esas localidades, provoca el despido de más de cinco mil personas en ciudades que suman apenas 55.000 habitantes y se convierte en el pivote de una situación de tensiones e incertidumbre que venía alimentando a los pueblos. Los habitantes cuatralquenses, abandonados por el Sindicato Unidos de Petroleros del Estado (SUPE) y el Estado nacional, desencadenan una modalidad de lucha –el corte de ruta– que tensiona el sistema político provincial y

nacionaliza el conflicto al difundir territorialmente esa estrategia novedosa para expresar el descontento contra el ajuste, a través del proceso massmediático. En junio de 1996 se produce la pueblada de Cutral-Co y Plaza Huincul –que no es la primera en Neuquén (Iuorno, 2004: 1-15)–, contundente y masiva en su apogeo, como frágil y desamparada en el momento de las definiciones. Los vecinos de esas localidades petroleras reclaman la instalación de una industria para escapar a la triste categoría de *pueblo fantasma*. Desde 1991, con la desregulación del mercado petrolero y el redimensionamiento de YPF, se asiste al fin de la función social de la empresa pública (proveeduría, talleres, hospital, servicios eléctricos y traslados, etc.) y al inicio de una masiva desocupación. Entre los días 20 y 26 de junio de 1996, cerca de cinco mil personas apostadas en las barricadas de neumáticos encendidos, denominadas por la prensa local como *piqueteros*, sitian ambas localidades. Son jóvenes pobladores que expresan a un grupo heterogéneo donde conviven desde los obreros de la construcción hasta docentes y cuentapropistas. La medida cuenta con el apoyo de la cámara de comercio local y otras asociaciones intermedias; se cierran las puertas de los comercios, se interrumpen todas las actividades, el transporte, el tráfico en el aeropuerto y la propia ruta 22 de acceso a los centros urbanos. La posición de los sujetos sociales es contundente: quieren que el gobernador se traslade al centro del conflicto con una propuesta sobre la planta de fertilizantes. La población de Cutral-Co y Plaza Huincul convocada por la radio local –vinculada a la *línea blanca* emepenista¹¹– asume un protagonismo que desborda el accionar de los punteros políticos, no obstante, los intendentes de las dos localidades pertenecen al partido provincial. Los piqueteros armados de piedras, hondas, palos, con la cara cubierta, tienen a maltraer a la gendarmería que retrocede. Antes de la llegada de las fuerzas de represión, la jueza federal (Margarita de Argüelles) piensa que “va a ver a algún representante, algún concejal [...] pero no había nadie, había pueblo, había miles de cabezas, eso era lo que había” (*Río Negro*, 1996: 7)¹².

El gobierno provincial, que en un comienzo parece adormecido, emprende tardíamente la búsqueda de solución pero inmediatamente a potenciar la derrota. Sapag pasa de recibir cascotazos e insultos a ponerse al frente de las demandas. La *pueblada que encabezó Don Felipe* contra el gobierno nacional –dicen muchos de los sujetos involucrados– termina convirtiéndose en una estrategia más de Sapag, acostumbrado –por su carisma y habilidad– a revertir situaciones desfavorables de la población de Neuquén. De un conflicto desinstitucionalizado se pasa a una protesta institucionalizada, pues se negocia intensamente, durante varios meses, y se logra, entre otras cosas, como reparación histórica, la cesión del yacimiento gasífero El Mangrullo a los municipios de las localidades del conflicto (Favaro et al., 1997: 13-27).

A los pocos meses, la huelga docente que estalla en Neuquén en marzo de 1997 es el detonante de la segunda pueblada en las localidades petroleras. Un párrafo aparte respecto de los docentes neuquinos y su oposición a la Ley Federal de Educación. Según estudios realizados por especialistas en educación, las raíces históricas de la conformación del sistema educativo neuquino, con fuerte tradición civil y de participación comunitaria en la creación de escuelas, son lo que permite que los dirigentes del sindicato docente tengan fuerza, no planteen negociación y confronten con el gobierno, con cierto beneplácito por parte de la sociedad neuquina, a pesar de que, luego de Santa Cruz y Tierra del Fuego, los neuquinos son los docentes que perciben los mejores salarios del país (*Río Negro*, 2004).

Los docentes en pleno conflicto con el gobierno por una variedad de temas, entre los cuales, el más significativo es la negativa a que se aplique la Ley Federal, ocupan el puente sobre el río Neuquén en la ruta 22 que separa las dos ciudades: Cipolletti (Río

Negro) y Neuquén. A pesar de la reapertura del puente –gendarmería de por medio– el conflicto no desaparece; antes bien, se traslada de la ciudad de Neuquén a las localidades petroleras, donde un grupo de jóvenes, autodenominados fogoneros, en apoyo de las demandas docentes cortan la ruta a la altura del acceso a Cutral-Co, incomunicando al resto de la provincia. Los fogoneros, que no totalizan más de cien jóvenes de entre 14 y 20 años, hacen frente a los cuatrocientos gendarmes con *palos, fierros, gomas y hondas gallegas*. La violenta represión y la intervención de la policía provincial derivan en la muerte de Teresa Rodríguez, que aglutina aún más a la comunidad cutralquense, reavivando el problema de la desocupación y las promesas incumplidas del gobierno neuquino. Simultáneamente a las negociaciones de Sapag con los docentes, se generaliza el conflicto en toda la provincia; las manifestaciones contra la represión y la repercusión a partir de la difusión de las imágenes, permiten instalar en el escenario nacional los efectos de la privatización de YPF. Los fogoneros denuncian a los protagonistas de la anterior pueblada: “somos fogoneros, no piqueteros, los piqueteros traicionaron la esencia de la pueblada y transaron con el gobierno, con el cual se acomodaron, olvidándose de sus compañeros de lucha” (*Río Negro*, 1997: 8). Estos sujetos de la protesta están lejos de cualquier planteo ideológico, no les interesa el poder, descreen de la dirigencia política y gremial y desconfían de los funcionarios. Si bien algunos reconocen haber votado al MPN, otros al Partido Justicialista (PJ) y algunos ni creen en las elecciones, la distancia entre las promesas y sus cumplimientos uniforma la imagen que tienen de la política. Participan de las asambleas de las localidades cuyo funcionamiento permite la emergencia de prácticas no consagradas en el orden jurídico, solicitando resultados en acuerdo con las autoridades, a corto, mediano y largo plazo.

En las dos puebladas, la sociedad cutralquense mantiene inalterado su apoyo a la democracia, pero rechaza la intervención de los partidos políticos y dirigentes sindicales. Así sucede cuando el poder político intenta nuevamente transformar la protesta y convertirla en un instrumento más de la tradicional estrategia de legitimación y resolución de conflictos que caracteriza históricamente el accionar del MPN; esto es, definir como adversario al estado nacional y trasladar su responsabilidad en el conflicto. Aunque en esos momentos se definen nuevos culpables: los docentes *instigadores de la pueblada de Cutral-Co y Plaza Huincul* y la *pesada herencia* que deja su antecesor, Jorge Sobisch¹³.

En síntesis, estas acciones colectivas de protesta –que no apuntan al sistema, antes bien, a su inclusión en este– y la actuación del estado están íntimamente vinculadas, ya que en la mayoría de los casos, las protestas tienen como objetivo la obtención de asistencia y terminan cuando esta se logra. Tengamos en cuenta que el Estado nacional con su respuesta no solo legitima a los nuevos sujetos sociales de las puebladas, sino también legaliza la distribución como herramienta para contener y/o terminar con las acciones, por ello, muchas políticas asistenciales son creadas en los años noventa para, como bomberos y ambulancias, apagar incendios y recoger heridos. La explotación de hidrocarburos genera en las localidades neuquinas un imaginario social que no contiene en su horizonte de posibilidades el agotamiento del crecimiento y de su propio porvenir; estalla, de este modo, la mística neuquina y el trabajo abundante se reemplaza por subsidios de desempleo.

El conflicto no termina con estas puebladas, continúa latente; más aún, es un territorio asociado a hechos violentos y, aunque las movilizaciones tengan carácter espontáneo en más de una oportunidad, la mayoría de ellas tienen como referente a las organizaciones sindicales, que lideran reclamos puntuales (laboral-salarial) adhieren a situaciones de injusticia en el territorio (por las actuaciones de la justicia neuquina), en defensa de

instituciones (ISSN, EPAS, EPEN, etc.). En los últimos meses, modifican su estrategia: se presentan en una modalidad de marchas que les posibilita estar con distintos grupos en varios lugares al mismo tiempo, aunque la columna mayor se ubique siempre frente a la casa de gobierno, a la legislatura o al poder judicial. Asimismo, se encuentran organizados el sector ceramista de la fábrica Zanón (Favaro y Aiziczon, 2003: 40-58)¹⁴ y el movimiento piquetero –a través del MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados), CCC (Corriente Clasista y Combativa), BP (Barrios de Pie), PO (Polo Obrero) y T.V. (Teresa Vive)– que refuerzan el repertorio de la protesta social; “movimiento que nació confundido dentro de una orgullosa clase protegida por nuestro estado benefactor expulsada por el estado privatista menemista” (Rafart, 2004: 18-19). A los ya mencionados, es necesario incorporar a los colectiveros de la Cooperativa El Petróleo, ADOS (ex hospital ferroviario, ahora Cooperativa de Salud), los universitarios, los vecinos sin techos, los anti-peaje (MAP), etc. El gobierno local intenta controlar a los desocupados –simultáneamente al ejercicio clientelar y bajo el presupuesto que el objetivo es terminar con esta práctica– a través de un plan de bancarización¹⁵, instrumentando una tarjeta solidaria para dar cobertura a los cerca de 30 mil desocupados, dejando atrás la ley provincial, luego de ocho años de vigencia. Para expresar su rechazo, distintas organizaciones de desocupados, piqueteras, indígenas¹⁶, gremiales y de derechos humanos, entre otras, ocupan las calles, rutas, plazas, tierras, espacios que les son vedados. A todo esto es necesario agregar las recientes manifestaciones y ocupación de escuelas de los estudiantes de enseñanza media por, entre otras cuestiones, el aumento del presupuesto educativo, la no aplicación de la Ley Federal de Educación, la defensa de la validez de los títulos otorgados por la provincia, el fin de la represión, las intimidaciones y persecuciones a los estudiantes, la entrega de becas, la implementación del boleto estudiantil, etc.; hechos que rebasaron las expectativas del gobierno que –para desactivar la protesta cuyas proporciones no eran previsibles– intenta dar respuesta a la mayoría del peticorio que impide cerrar el conflicto (Lizárraga, 2004: 5)

Es necesario tener en cuenta que la riqueza de esta provincia no sirve hasta el momento para modificar los indicadores sociales, ni reducir las desigualdades y la pobreza. La política social no tiene la capacidad de estructurarse en torno al concepto de ciudadanía y se basa en la asistencia y la distribución. En un informe consignado por la prensa regional se dice que paralelamente al ritmo de crecimiento del 5,3% anual de Neuquén, el 50,7% (2002) (alrededor de 240.000 personas) son pobres, porcentaje que se reduce al 46,5% (2003), se incrementa la indigencia, aumentando los grupos con altos grados de vulnerabilidad, a pesar de la vigencia de los planes Jefes y Jefas de Hogares y una cobertura muy grande del plan provincial Ley 2128, subsidios de UOCRA, decretos Cutral-Co-Plaza Huinul, programa ferroviario y vial, etc. (*Río Negro*, 2004a: 14). Recordemos que Neuquén constituye el conglomerado urbano más importante de la Patagonia y tiene, después de Santa Cruz, la franja más pequeña de desocupados¹⁷. En este orden, sin embargo, es necesario hacer referencia a los planes y programas de empleos o sociales (CELS, 2003: 27-45) y reconocer que existe una tradición clientelística de la política social. Las puebladas cutralquenses han sido y son el pivote de un repertorio de acciones colectivas de pobladores de las más relegadas áreas del país, especialmente de ciudades que dependen laboralmente de alguna empresa pública, privatizada en los noventa, los primeros en cortar rutas para exigirle al estado nacional o provincial respuestas concretas. La crisis de 2001 agudiza los conflictos que provocan el traspaso de la empresa pública a manos privadas, con la consiguiente expulsión de mano de obra, precariedad de trabajo, incapacidad de los políticos para resolver los problemas de la sociedad y un estado que, como el neuquino –controlado por un grupo de sectores

burgueses, aliado a las petroleras—, también muestra una faceta, poco conocida tiempo atrás: la corrupción; de este modo, hay cada vez más desocupados que optan por cortar calles, rutas y puentes, y manifestarse, pacíficamente a veces, con violencia otras, en el contexto de las propias internas de gobierno local, de la “oposición”, del gobierno nacional (el gobernador está enfrentado al gobierno nacional, utiliza como bandera el centralismo, hoy a través de la discusión por la coparticipación) y de los propios piqueteros (sectores D’Elía, Pitrola y Castells).

Ahora bien, en el marco de lo expuesto, a pesar de la importancia del empleo público y de los planes sociales, el conflicto —en especial en la ciudad capital— continúa.

Tengamos en cuenta que Neuquén ocupa el sexto lugar entre las provincias argentinas por su dependencia del gasto público estatal. Sobre 474.155 habitantes, hay 36.909 empleados públicos provinciales, 7.700 empleados públicos municipales y 18.039 personas que reciben planes Jefes y Jefas de Hogar, lo que muestra que en la provincia habría un 24,84% de la población con “voto cautivo”¹⁸. ¿Cómo explicar la relación voto cautivo con mayoría de votos al partido provincial. Una parte, quizás, pueda entenderse por los mecanismos de dominación ideológica (adaptación, miedo, resignación, etc.) (López y Thwaites Rey, 1990: 19-30) sobre los beneficiarios de los planes y los propios empleados públicos; sin embargo, a nuestro criterio, un porcentaje muy importante de ciudadanos interpelado por el partido provincial, lo acepta y vota. Mientras que las generalidades de los enunciados de los otros partidos condicionan su presentación al ciudadano como alternativa eficaz y eficiente para llevar adelante el gobierno. El MPN es elegido por una sociedad heterogénea y cambiante sobre la que incide los procesos nacionales en el sentido inversamente proporcional a las otras provincias. Pareciera que en Neuquén la ciudadanía primero define con unicidad el gobierno local y luego, el gobierno nacional, en el que —a veces— prevalecen las cuestiones ideológico-político-partidarias de raíz. Es necesario, además, tener en cuenta el significado de la dictadura para la sociedad neuquina, en la que se operan profundos cambios. No sólo se opone al régimen amparada por la iglesia, sino que prácticas religiosas tradicionales van tomando cariz político. Como un investigador local, se va construyendo una historia “de la organización social de la resistencia a la dictadura, la formación y el sostenimiento de los vínculos de solidaridad dieron lugar a un modo particular de organización y movilización social, donde las prácticas e ideologías políticas se fueron asimilando a los ritos y valores religiosos” (Mombello, 2003: 149-163). Todo lo expuesto contribuye a definir a Neuquén como un espacio de frontera caracterizado por una particular cultura política, entendida como una forma de vida que implica la existencia de un sujeto y un sistema político. Involucra diversidad social y cultural, acciones e identidades, pautada por la tradición de un partido hegemónico que niega pensarse como parte, que tiene una visión y la difunde, impregnada de totalidad. En síntesis, Neuquén es un lugar de significados y de luchas sentidas por sus habitantes en términos de sus derechos anclados en el pasado, resignificado por la fuerza local al territorializar la memoria y darle una identidad a la ciudadanía neuquina. Todo ello en el marco de un país con paradojas y complejidad social: un 60% de sindicalización al mismo tiempo que un 18% de desocupación, y en el que las protestas sociales están cambiando de escenario: cada vez es mayor la desinstitucionalización de los reclamos.

Río Negro: una provincia descentralizada. Intereses *localistas* trastornan la integración política y económica

En Río Negro¹⁹ desde la etapa territorialiana (1884-1955) comienzan a definirse las principales actividades económicas en las diversas zonas geográficas. En el Alto Valle, a la tradicional producción frutícola se le incorpora la explotación petrolera²⁰. En la zona atlántica –constituida por un conjunto de centros urbanos con altos grados de desconexión entre sí– la ganadería, la agricultura de secano y bajo riego y la minería –mina de hierro en Sierra Grande– dan cuenta de la diversidad. La zona andina tiene en la explotación de los recursos paisajísticos y la actividad forestal sus principales fuentes de empleo, de ingresos y de aportes de regalías (Fulvi et al., 1981: 17-23). Cuando el espacio rionegrino adquiere el estatus de provincia, ya había logrado un significativo impulso socio-económico y una temprana articulación con la esfera nacional y con el mercado internacional –en la década del treinta se produce una expansión de la producción frutícola²¹–. En la década del sesenta, se conocen importantes mejoras en el sector agrícola con una fuerte tecnificación en las parcelas y una diversificación social tanto de los empresarios como de los trabajadores inmigrantes internos y de países limítrofes, mayoritariamente de origen chileno. Estos cambios y mutaciones se acompañan con una significativa urbanización, del crecimiento de la construcción y de las obras de infraestructura estratégicas. En el contexto “desarrollista” se trazan programas que buscan expandir el este de la provincia y superar el perfil agropecuario provincial logrando una manifiesta explotación industrial y de los recursos mineros. Sin embargo, la inestabilidad institucional provoca cambios en la política de desarrollo local que se sostiene en la idea de modificar el polo de desarrollo provincial extrayendo recursos del Alto Valle para trasladarlos al aparato tecno-burocrático de la capital rionegrina (Manzanal, 1980: 60). En este contexto, la provincia nace con una particularidad que la caracteriza aún hoy: su alto grado de *in-integración* –carece de un centro de integración real– tanto política como económica. El estado rionegrino se conforma sobre la base de una sumatoria de localidades, con particularidades propias y con intereses encontrados, aunque no siempre disímiles, que conmueven y acalambran la cotidianidad y la política, cristalizando una relación articulada en meros lazos administrativo-burocráticos con la capital –Viedma– sin una sólida integración provincial.

El carácter eminentemente privado de la producción frutícola hace que las crisis cíclicas, particularmente a partir de los años setenta, sean absorbidas fundamentalmente por los pequeños y medianos productores, los más dependientes del crédito estatal. Por un lado, la desindustrialización –que contrasta con el crecimiento experimentado por otras provincias patagónicas en el mismo período– trae aparejado un crecimiento relativo del sector terciario de la actividad de la economía (existían industrias metal-mecánica, textil, pesquera y agroalimentaria con un significativo desarrollo). Por otra parte, durante los años ochenta, la economía provincial asiste a un estancamiento de la actividad ganadera, provocando una importante crisis social en las localidades de la denominada Línea Sur, y una buena parte de la población rural migra a los centros urbanos del Alto Valle, particularmente hacia General Roca. A la migración intra-provincial debemos sumar los nuevos inmigrantes chilenos, quienes ante la falta de trabajos en el ámbito rural se establecen en el área urbana como cuentapropistas, incrementando la población de los barrios periféricos ya existentes o posibilitando la emergencia de nuevos asentamientos.

La hiperinflación y las deudas que jaquean a las empresas privadas, contrayentes de créditos desde la dictadura de 1976 hasta los años de la transición democrática,

conducen al gobierno provincial a firmar nuevos acuerdos con ellas, acudiendo en su *salvataje*²². Estas empresas involucran en juicios a funcionarios del directorio de Banco de la Provincia de Río Negro. Mientras tanto, los empresarios locales transitan de refinanciación en refinanciación, integran fuertes *lobbies* que actúan sobre los dirigentes políticos, escudándose en la defensa de las fuentes de trabajo, destacándose su protagonismo en el desarrollo económico local. En la retórica empresarial ya no existen las utilidades, sólo los empleos (Chomsky, 2001: 134-135). La crisis del *estado benefactor* y la aplicación de políticas neoliberales que lleva a la privatización de empresas nacionales –YPF, Gas del Estado, Hidronor, Agua y Energía y Ferrocarriles Argentinos– afectan fuertemente a la sociedad provincial y aumenta la consabida desocupación. Paradójicamente, se crea en 1995 Servicios Ferroviarios Patagónicos (SEFEPA) para los rionegrinos de la Línea Sur. La existencia de mineral de hierro en la provincia conduce, en esa década, a su explotación por parte de la empresa HIPASAM (Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera) encabezada por Fabricaciones Militares. En 1991, el pueblo, que crece de forma explosiva –8.000 habitantes–, queda en una situación desesperante tras la decisión presidencial del cierre de la mina generando desocupación masiva y la emergencia de un *pueblo fantasma*²³. El gobierno rionegrino, superado por las demandas sociales y por la incorrecta negociación de las regalías, avanza además en la privatización de empresas propias, entre ellas, el banco provincial que cede el lugar al banco privado Patagonia. La privatización de los servicios básicos implica una fuerte presión sobre los sectores medios urbanos y un aumento de las disparidades sociales. La sociedad se fragmenta y las tensiones aumentan, que en ocasiones se expresan como explosiones sociales, caracterizando a esta provincia durante todo el caliente año 1995.

Los *camionetazos*, *tractorazos*, *autazos* y diversas acciones gremiales *galvanizados* por las medidas de re-financiación de deudas y nuevos créditos significan la ayuda habitual para la mayoría de los sectores empresarios y productivos en detrimento de la redistribución del ingreso²⁴. A llegar a los ochenta, la economía provincial desacelera su crecimiento respecto de décadas anteriores, con una tasa de crecimiento anual del 1,6%. En este marco, sólo la zona andina de Río Negro –Bariloche y El Bolsón– es el espacio de la provincia que concita la atención nacional para radicación de inmigrantes interprovinciales y de países limítrofes. Las razones que explican este comportamiento decreciente de la dinámica poblacional en toda la provincia, se encuentran en el proceso de desindustrialización –caída global del 47% en la industria manufacturera y la industria alimenticia que ve menguada su producción–.

A mediados de la década del noventa, la provincia encabeza la lista de endeudamiento en relación con su coparticipación, ya que afecta el 73,5% de sus recursos. Tiene la deuda pública más alta de país en proporción a sus habitantes (180 millones de pesos, es decir, un promedio 327 pesos per cápita). El ejecutivo se endeuda con los proveedores, contratistas de obras municipales, empresas proveedoras de servicios, alquileres de edificios, fondos compensadores, entre otros, y entre junio-septiembre la provincia, por las razones expuestas, no recibe los fondos por coparticipación de impuestos.

Actualmente, en la provincia existen asignados 21.239 planes Jefes y Jefas de Familia, marcando, en materia social, una mayor dependencia de nación. El gasto público estatal del 20,84%, se encuentra justo en el término medio en el concierto de las provincias argentinas. De este modo, se puede observar que con 30.053 empleados públicos provinciales y 5.200 empleados públicos municipales sumados al Plan Jefes, Río Negro tiene 56.492 *votos cautivos* (Río Negro, 2004c: 15).

Ciudades rionegrinas y protestas. Continuidades y rupturas

En 1969, la huelga llevada adelante por obreros de las obras de El Chocón es una de las primeras de una serie de manifestaciones obreras y de productores valletanos, al igual que la menos difundida –en la esfera local y nacional– protesta y huelga de los trabajadores de la empresa INDUPA –industria química–. También, los gobiernos locales nombrados por el *onganiato* (1966-1969) para administrar la provincia son jaqueados por protestas sociales difíciles de contener, tales como la revuelta popular en Cipolletti (1969), la “insurrección” en Bariloche (1970) y la resistencia socio-política en Roca (1972). En el primer caso, los motivos que “consiguen” llevar a la gente a la calle son: el trazado de una ruta que uniría a Roca con El Chocón para seguir a Bariloche sin pasar por Cipolletti y la decisión del gobierno provincial de obligar al intendente de la comuna a renunciar. Los distintos sectores sociales realizan asambleas, se cierran los comercios y se organizan movilizaciones²⁵. Por otra parte, los continuos cambios y el origen de los intendentes nombrados para Bariloche explicitan una “militarización del cargo” (Núñez; 2003: 117). En el último acontecimiento mencionado –*Rocazo*–, la resolución del gobierno de crear un nuevo juzgado, desmembrando así la Segunda Circunscripción Judicial, es la chispa que enciende la revuelta popular. El conflicto está liderado por fracciones burguesas –productores, comerciantes, estudiantes– con cierta relación con sectores monopólicos nacionales o extranjeros, vinculados entre sí, y por abogados –con incidencia en el Superior Tribunal de Justicia–; estos actúan como *intelectuales orgánicos* con una *clientela* de sectores medios²⁶. En estas puebladas, la ciudadanía cierra filas al interior de las ciudades de manera corporativa y el enemigo es externo –otra ciudad, el gobernador, el gobierno nacional– que afecta sus intereses económico-corporativos (Balvé, 1989: 12).

Las acciones dan cuenta de los conflictos que tienen las clases dominantes que responden a intereses *localistas*. Asimismo, la articulación de la base social popular en torno a principios de identidad federalista que implica el *éxito* del Movimiento Popular Neuquino, se verifica en Río Negro, en la década del setenta, con la fundación del Partido Provincial Rionegrino (PPR) por parte del ex gobernador militar que expresa las aspiraciones *provincialistas* de un importante sector independiente del electorado. El Plan Trienal de Salud (1973) que plantea la democratización del acceso a la sanidad y es un dispositivo de atracción de noveles profesionales a la región se desactiva tras las acciones de las clínicas privadas, muy fuertes para la época. Las estructuras sociales locales tienen una marcada peculiaridad en la norpatagonia, otorgada por la relevancia de los *sectores medios urbanos* en las mismas.

Paralelamente a la recuperación del sistema democrático y la reapertura de la economía nacional, la provincia atrae la atención de los argentinos cuando el presidente Raúl Alfonsín propone al Congreso el traslado de la capital de la república a la ciudad de Viedma. Sin embargo, la frustración del proyecto –ley derogada en el primero gobierno de Carlos Menem– es una primera señal del ajuste fiscal que se cierne sobre Río Negro. A esta nueva realidad es posible interpretarla como un punto de inflexión de la relación entre el gobierno provincial y el nacional. El gobernador Massaccesi, con un abultado endeudamiento provincial, aplica políticas de ajuste y una importante reducción salarial, provocando una crisis social de ribetes imprevisibles y la coparticipación comprometida hasta el año 2000. A su vez, apela a una maniobra política *populista* (1991) cuando ingresa a la sucursal del Banco Provincia de Río Negro y retira del tesoro regional del Banco Central diez millones dólares para pagar los sueldos de los empleados públicos; hecho que se instala en el escenario nacional, denominando al gobernador como un

nuevo *Robin Hood*. Frente a la nueva situación impuesta a nivel nacional con el cierre de empresas, el corte de ruta de los trabajadores de HIPASAM en Sierra Grande en 1991 se constituye en un acontecimiento pionero y emblemático. Este intento, entre otros, signado por el aislamiento social de los obreros y el consenso de buena parte de la sociedad, incluye a muchos de esos mismos trabajadores públicos y privados.

El radicalismo –partido gobernante desde 1983– logra mantener a través de distintas estrategias, alianzas y prácticas “clientelares” el control del gobierno y la mayoría parlamentaria. No existe en estos veinte años de vida democrática la alternancia, dado que el peronismo no logra serlo, ni aun en las elecciones del 31 de agosto de 2003. El deterioro de los sistemas de salud y educativo, la desindustrialización creciente, los bolsones de pobreza y la desarticulación provincial no impiden que el partido radical se constituya en un partido dominante, desde su re-conformación tras los *años de plomo*; la UCR rionegrina logra una *hegemonía excluyente* en el sistema político. En este marco, el PPR logra ocupar en 1987 un tercer lugar y rompe, de este modo, con el bipartidismo de los partidos nacionales. Por otra parte, el Movimiento Patagónico Popular (MPP) expresa más una oposición al radicalismo gobernante, que un partido con definiciones ideológicas, aunque vuelve a reivindicar la identidad regional patagónica del justicialismo de los años setenta.

En la peculiar dinámica provincial, las fracciones burguesas locales que tienen una particular modalidad de resistencia ante los avatares de los precios del mercado internacional de productos primarios –un *tractorazo*²⁷ de vez en cuando–, situación que consideran resultado del *irresponsable* manejo del estado, conjugan sus intereses con el modo de ejercer el poder. Los ciclos de buenas cosechas y buenos precios de la fruta en el mercado externo garantizan al gobierno un control en su relación con los sectores más dinámicos de la economía, sin embargo cuando ocurre lo contrario se invierte la tendencia, las alternativas de solución para los problemas del valle pasan más por el gobierno nacional que por el provincial. Asimismo, la intensidad de la competencia internacional fragmenta internamente ese ámbito social, eliminando a los pequeños productores y alimentando la concentración en grandes empresas integradas²⁸.

Viernes negro de octubre de 1995

En la década del noventa se registran nueve huelgas generales declaradas por una o varias de las organizaciones que agrupan a sindicatos o agrupaciones sindicales: Confederación General del Trabajo (CGT), Congreso (después Central) de los Trabajadores Argentinos (CTA), Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), Corriente Clasista y Combativa (CCC) y 62 Organizaciones Peronistas. En 1989 el nuevo gobierno nacional mantiene la expectativa del *salario* y la *revolución productiva* hasta que se evidencia su subordinación a la política del gran capital transnacionalizado e internacional que se encarna en la figura del ministro Cavallo. En 1994 una parte del movimiento obrero organizado sindicalmente protagoniza la Marcha Federal contra la política económica, la flexibilización laboral y el pacto fiscal (Iñigo Carrera, 2001: 122-123). La Argentina, país que se vanagloria de tener un sistema educativo público que no solo compite con el privado sino que es mejor, se ve sumergida en una profunda crisis. El año 1995 es clave en la historia reciente de la nación, habida cuenta que los efectos de la política gubernamental se sienten en toda la sociedad, y en los cuadros sindicales se evidencia una firme unidad frente a las mismas. En un marco nacional de huelgas generales, las huelgas de empleados públicos provinciales, tales como en justicia, educación y sector de la salud pública, signan a ese año y continúan el siguiente con un ataque al domicilio particular del gobernador electo.

En esos momentos, los “cuadros sindicales alcanzan su mayor grado de unidad en la acción” y las huelgas “reciben el más extendido apoyo desde otras fracciones de la sociedad” de acuerdo a una periodización de la década (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2000: 181). Las acciones colectivas en Río Negro son institucionalizadas y conducidas por los líderes sindicales de los empleados públicos en articulación con otros sectores de la producción y de la sociedad.

En 1995, la planta de empleados públicos suma 31.217 agentes en la órbita del poder ejecutivo. De ese total, 17.000 son agentes de educación, 4.400 de salud pública y 3.300 de la policía. Los 5.700 restantes corresponden a la Administración Central, Departamento Provincial de Aguas, Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Registro Civil y Vialidad Provincial. Esto significa que 80 de cada 100 trabajadores públicos está afectado a servicios básicos. Por otro lado, el desfinanciamiento del estado provincial conduce a la dificultad para el pago de salarios y servicios públicos. Hasta 1991 esa diferencia se encubre por la inflación que licua todos los déficit y por aportes extraordinarios de la nación, pero con el Plan de Convertibilidad la situación financiera tiene una complejidad mayor, además de la transferencia a la provincia de todos los servicios básicos. El gobernador anuncia el plan de ajuste y logra firmar con los gremios el Acuerdo de la crisis cuyo eje es: recortes graduales de salarios sin despidos masivos. Sin embargo, en julio, comienzan los retrasos en el pago de los salarios y las acciones colectivas tienden a una mayor organización con la Coordinadora de Gremios Estatales, integrada por la Unión de Trabajadores de la Educación Rionegrina (UNTER), el Sindicato de Trabajadores de la Justicia de Río Negro (SITRAJUR), empleados de hospitales públicos mayoritariamente afiliados a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y a ATE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionados, la Coordinadora de Padres y la Multisectorial. Tres años después, el modelo de desarrollo provincial –*Soñar y Hacer*– paradójicamente propone, para salir de la emergencia social, el Plan de Recuperación Financiera, el cual se pone en marcha en octubre para lograr una normal transición en diciembre de 1995.

Los dos meses sin cobrar los salarios ni el medio aguinaldo logran galvanizar, coyunturalmente, a los docentes, empleados hospitalarios y de la justicia en acciones colectivas contra el gobierno provincial. Se acuerdan diferentes medidas de fuerza: paros, retención de servicios, movilizaciones y marchas acompañadas de ollas populares en demanda de un cronograma certero de percepción de los salarios adeudados²⁹. En la justicia, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) emite una acordada en que virtualmente se prohíbe el paro y otra en que recomienda a los titulares de los juzgados que comisionen a los empleados en su propio lugar de trabajo, impidiendo el abandono de tareas por retraso salarial; ambas generan el rechazo de los jueces y la negativa a aplicarlas. En la provincia, tres son las circunscripciones en que se divide el servicio de Justicia y sus cabeceras son San Carlos de Bariloche, General Roca y la capital, Viedma, en ellas conviven foros penales, civiles y laborales. En la década del noventa, trascurridos 32 años del llamado *Rocazo*, se incorpora una cuarta jurisdicción en Cipolletti con la cámara de Justicia Laboral. A la situación de emergencia social se le pretende poner paños fríos con las bolsas de alimentos que envía acción social provincial dentro de los planes asistenciales propios y con el Programa Único Nutricional Rionegrino que asiste en forma permanente a los sectores con necesidades básicas insatisfechas que ascienden a 150.000 en la década del noventa, lo que implica el reconocimiento desde el poder político de la pobreza creciente en la provincia³⁰. Las fuerzas políticas de la oposición se expresan a través del MPP y del PJ demandando la búsqueda de una pronta solución a los salarios adeudados; pero el Frente Grande, con una clara articulación con el Frente Estatal Rionegrino (FER), adquiere un espacio de

significación en la arena política, y la línea política radical, Frente para el Cambio, pide al gobernador electo que se haga cargo anticipadamente del gobierno para evitar la “descomposición de la sociedad rionegrina, el deterioro de la educación y el total abandono de la salud pública” (*Río Negro*, 1995b: 11). Los docentes y la retención de servicios presentan un desafío al ejecutivo: el adelantamiento del calendario escolar tras sólo 50 días de clases³¹.

Las acciones organizadas por el FER, en el mes de septiembre, comienzan con una marcha multitudinaria, si se considera que mayoritariamente los trabajadores participantes pertenecen a organismos e instituciones del poder ejecutivo, legislativo y judicial provincial de la capital. No obstante existir un cronograma de pagos, los trabajadores estatales llegan al hastío y al hartazgo, rompiendo vidrios de la casa de gobierno, la Caja de Previsión y la residencia del gobernador, incendiando cubiertas frente a los edificios públicos, todos ellos objetos y lugares que simbolizan el poder provincial. UPCN –organización históricamente cercana al gobierno de turno y a la CGT– se coloca al frente de la lucha³². Estas acciones difieren en mucho con el motín de Santiago del Estero de diciembre de 1993 –que carece de organización sindical y política que conduzca los sucesos– y no se constituye ninguna organización con desarrollo posterior; la marcha por las calles de la capital rionegrina, planificada con antelación, es una acción colectiva no circunstancial. En nuestro caso, no se produce una ruptura en la relación pueblo-representantes: el radicalismo conserva el liderazgo ante la sociedad que se evidencia en la continuidad del partido al frente del ejecutivo. Esto le otorga una especificidad al sistema político provincial en el cual la relación representantes-representados no se fractura ni aun en la situación histórica de una crisis económico-financiera con consecuencias nunca antes experimentadas por la sociedad en su conjunto, particularmente los sectores medios urbanos.

La multisectorial *Río Negro de Pie* coordina con los estatales y, acompañados por la Coordinadora de Padres y la Coordinadora de Jubilados, organizan las marchas y movilizaciones. Las fuerzas políticas de izquierda tienen una presencia evanescente, el Frente Grande y el Partido Humanista acompañan pero desde el costado gremial. Si seguimos la crónica de los acontecimientos, en octubre, la caldera del descontento sigue encendida y el fuego es alimentado por la ausencia de resoluciones que satisfaga a los trabajadores estatales. Por su parte, los comerciantes y los colegios de profesionales se auto-convocan, dado que otro elemento de bronca popular se incorpora a la lucha por el atraso salarial: la banca de senador para Massaccesi. Se ocupan edificios públicos, se cortan rutas. A diferencia de las jornadas de septiembre, la chispa se enciende en Roca; luego de la multitudinaria marcha el grupo de elite de la policía –Brigada de Operaciones de Rescate y Antimotines (BORA)– se encarga de reprimir, lo que desencadena la reacción popular, apedreando edificios públicos. Mientras en la capital provincial se reprime con gases lacrimógenos, chorros de agua, balas de goma, en todas las ciudades hay heridos y detenidos y en otra localidad los manifestantes queman la residencia del ministro de Economía que había declarado ante la justicia por los hechos de corrupción del Banco Provincia de Río Negro, el gobernador firma apresuradamente un decreto de necesidad y urgencia para privatizar el ERSE –empresa de energía eléctrica– lo que le permite acceder a fondos que desahoguen la tensión social. Antes de las elecciones de mayo de 2003, el análisis político regional se centra en las diferencias provocadas por el regionalismo y el localismo en las preferencias electorales donde la personalidad de los candidatos suma o resta votos. Con una “clase política” conformada por funcionarios y extra-partidarios amigos del poder, el radicalismo compite desde la fragmentación con el Movimiento de Acción Rionegrina (MARA) y el Frente Grande que forman la alianza multipartidaria. El radicalismo se presenta para

interpelar a la ciudadanía rionegrina sin discurso, ni mística ni convicción, pero corriendo con una mínima ventaja frente al PJ dividido en dos líneas tras los resultados de la compulsa interna. El bastión radical se ve disminuido y la dirigencia saca para las elecciones el empobrecido aparato del estado y lo pone al servicio de la campaña partidaria. El candidato del PJ posee la ventaja por la pertenencia al mismo partido que el gobierno nacional, sin embargo no basta para ser una alternancia para el régimen político. El oficialismo provincial, además, recurre frecuentemente a la concesión de beneficios selectivos para algunos referentes de la oposición lo que mina la capacidad organizativa y de constitución de la propuesta alternativa para la ciudadanía. No obstante, el gobierno tiene pendiente reconvertirse y buscar un equilibrio entre el estado y la actividad privada, entre regiones prósperas e inmensas extensiones carecientes. Recordemos que la UCR ya no constituye una fuerza o núcleo de carácter nacional sino un conjunto de partidos provinciales cuyos límites el PJ de Kirchner busca romper para ir anudando alianzas, ampliando la base de sustentación política del proyecto del ejecutivo. El escrutinio final en la provincia señala un ajustado triunfo del candidato radical, quien convoca, desde una concepción transversal de la política, a extra-partidarios para ocupar lugares estratégicos, en afán de crecer *hacia fuera*, es un intento de construir una fuerza propia dentro y desde el partido. Esta práctica política no es novedosa en el radicalismo provincial habida cuenta que desde 1987 es la estrategia de los gobiernos con las figuras claves de la oposición.

En síntesis, la protesta social rionegrina en el marco de la crisis concentra a los *sectores medios urbanos* en las calles tras ver menguados sus ingresos y ser avasallados sus derechos de trabajadores, pero lo que es más profundo aún, el deterioro del sistema de salud, la educación y la justicia, saca a la calle al conjunto de la sociedad. El objeto de la protesta (1995) no es la desocupación sino el temor a perder el empleo, no es el pueblo que espontáneamente sale y ocupa las calles, sino las organizaciones sindicales que el atraso salarial les posibilita, por primera vez, *acciones colectivas unívocas* en esta yuxtaposición de localidades que otrora sus ciudadanos se expresaran con las puebladas. Que el radicalismo continúe con el poder político quizás pueda explicarse por los mecanismos de dominación y los dispositivos legitimadores que se ponen en acción, desde hace más de dos décadas, con los beneficiarios de los planes de vivienda, los programas asistenciales, los empleados públicos provinciales y, por otro lado, los beneficiarios de la política crediticia y “prebendaria”. No obstante, un número significativo de ciudadanos de esta sociedad heterogénea –con escurridizos elementos materiales y simbólicos de *unicidad identitaria*– es interpelado por un partido que en las últimas administraciones disfrazaba, enmascara de cambio lo que no quiere que cambie. Hoy es el Río Negro *porvenir*.

Conflicto y límites al ajuste en la provincia de San Juan. Las turbulencias de mediados de los noventa

En este caso, analizamos los conflictos y turbulencias ocurridos hacia mediados de los noventa en la provincia de San Juan. Más allá de la crónica de los hechos, consideramos que es particularmente interesante analizar algunos componentes sociopolíticos de la sociedad regional que con la crisis salen a la luz y, asimismo, observar cómo estas turbulencias guardan relación con otros hechos que se desarrollan en el país³³.

Comencemos describiendo muy brevemente algunos elementos estructurales de la provincia.

San Juan como provincia del área periférica

La principal actividad económica de la provincia a lo largo del siglo XX es la vitivinicultura, emprendimiento que se desarrolla con las características propias de lo que en Argentina se denomina *economías regionales*, cuyos elementos centrales son su carácter de monoproducción provincial y su realización casi exclusiva en el mercado interno nacional. A grandes rasgos, el patrón productivo sanjuanino, signado por la vitivinicultura se caracteriza por:

- Un entramado regulatorio de base nacional que garantiza la supervivencia del emprendimiento y de todos sus componentes.
- Este entramado regulatorio sostiene procesos productivos caracterizados por permitir la reproducción de minifundios vitícolas y PyMEs bodegueras, a la vez que garantizan rentas extraordinarias a productores de mayor escala y avance tecnológico.
- Un ámbito de articulación donde se anudan intereses regionales con otros extrarregionales³⁴.

Las contradicciones hacia el interior del emprendimiento vitivinícola (en función de la posición en la estructura productiva, de la escala de producción, de la articulación entre viñateros y bodegueros, etc.) tienden a quedar desdibujadas detrás del objetivo común de todos los agentes económicos de competir con actores de otras regiones en la obtención de regulaciones favorables por parte del gobierno nacional (protección arancelaria, subsidio bancario, regulación del área sembrada, etcétera).

Alrededor de estos procesos socioeconómicos y de los procesos de democratización política que ocurren a nivel nacional hacia principios del siglo XX, surge el Partido Bloquista –liderado por los hermanos Federico y Aldo Cantón– como escisión provincial de la Unión Cívica Radical. Este partido, que tiene fuertes choques con el gobierno nacional, propugna importantes y novedosas medidas sociales y políticas; por ejemplo, San Juan es la primera jurisdicción con voto femenino.

La hegemonía bloquista se mantuvo, aunque con algunos altibajos, durante casi todo el siglo XX, erigiéndose en uno de los partidos provinciales más importantes de la Argentina. Como casi todas las agrupaciones de este tipo, y a despecho de antecedentes ideológicos cercanos al ideario socialista, a partir de la llamada Revolución Libertadora (1955), el bloquismo tiende a articularse con gobiernos militares y partidos conservadores.

Desde fines de los años cincuenta, el liderazgo de los Cantoni es heredado –dentro del propio Partido Bloquista– por Leopoldo Bravo, que se desempeña varias veces como gobernador provincial, tanto por voto popular como por medio de designaciones de los gobiernos nacionales de facto.

Los procesos de reconversión desarrollados a partir del golpe de 1976 –desregulación, apertura externa, reducción de subsidios del Estado nacional, etc.– indujeron un generalizado empobrecimiento de la provincia. Esto es así porque su despliegue conlleva la fractura de las llamadas economías regionales, entre ellas, del complejo vitivinícola con eje en las provincias de San Juan y Mendoza³⁵. Estos procesos, como veremos, se articulan con el inicio de la decadencia del bloquismo como partido hegemónico.

San Juan en la era del ajuste estructural. Las nuevas condiciones: crisis vitivinícola y paraíso clientelar

La nueva etapa económica, social y política que se abre hacia mediados de los años setenta es particularmente desfavorable para la provincia de San Juan. El aparato productivo de esta jurisdicción se basa casi totalmente en la vitivinicultura, y a partir de esta fecha comienza una dolorosa reestructuración de la actividad. Algunos datos dan una idea de la profundidad de la crisis: la cantidad de unidades productivas descienden un 45% entre los censos agropecuarios 1969/2002; entre los censos agropecuarios 1969/1988 se pierden más del 55% de los puestos de trabajo rurales³⁶, en los emprendimientos referidos al rubro “Elementos alimenticios y bebidas” en el espacio intercensal 1974/1994³⁷ se observa una reducción de aproximadamente el 20% de establecimientos y personal ocupado. La crisis no sólo afecta a la provincia; el desmonte de una gran cantidad de firmas que desarrollan tareas de fraccionamiento y comercialización rompe la cadena que articula a actores nacionales y provinciales en la producción de vino.

La crisis abierta hacia la década del setenta hace que la forma y objetivos de política provincial muten a partir de la violenta reconversión que reposiciona el lugar de los agentes económicos ligados a la vitivinicultura en el tablero provincial. Los actores rurales ligados a la producción vitícola y los urbanos vinculados a los emprendimientos bodegueros deben amoldar su situación a la nueva lógica reinante bajo peligro de desaparición.

El gran productor agrícola, miembro cardinal de la clase tradicional sanjuanina, cuya gestión paternalista es un elemento clave en la política provincial, se reemplaza por el productor internacionalizado que a veces ni siquiera conoce el campo en donde invierte. El viejo puestero o los peones rurales que tienen una relación con elementos de sujeción personal para con el amo/patrón, es suplantado por la cuadrilla a cargo de un profesional. De esta manera, los agentes dinámicos del mundo rural pasan a estar compuestos en casi todos los casos por población de origen urbano, que puede ir al campo más o menos asiduamente, pero que generalmente vuelve cotidianamente a sus hogares en la ciudad. A diferencia de lo que ocurre en el modelo anterior, estos agentes productivos, que junto con los mineros representan a los sectores más dinámicos y concentrados de la economía provincial, tienen una muy baja vinculación con el estado provincial.

La gran cantidad de establecimientos localizados en áreas rurales y ciudades intermedias que no pueden reconvertirse generan una población *liberada* que migra hacia los alrededores de la capital provincial (el llamado Gran San Juan), que abruptamente incrementa su peso poblacional relativo. El fenómeno se agrava con la desaparición de esa verdadera válvula de compensación demográfica que fueron las corrientes migratorias dirigidas hacia la región pampeana.

La confluencia de hechos termina generando que en el Gran San Juan, un núcleo poblacional que no ocupa más del 2 o 3% de la superficie provincial, se concentre más del 90% de la población. En el proceso, el Gran San Juan se engulle algunos departamentos que otrora tenían vida propia (Ullum, Caucete, Pocito, Zonda, etc.) y que ahora se convierten en espacios periurbanos con importante presencia de población de bajos recursos.

Ante esta situación global –desaparición de buena parte del aparato productivo, situación de enclave de agentes económicos que logran una reconversión exitosa, concentración de población pobre y lábil en cinturones periurbanos– el accionar de la administración pública surge como el eje vertebrador de la vida provincial. Es que su

envergadura la convierte en el factor clave para sostener un cierto nivel de actividad, empleo y demanda agregada.

Uno de los aspectos que apuntala la centralidad de la administración pública es el rol que ocupa dentro de un mercado de trabajo agudamente deprimido por los procesos de reconversión. Así, el empleo público concentra más del 36,5% de los empleados, guarismo que da una idea del impacto de este tipo de empleo en la provincia, casi un 40% superior al valor que este mismo registro tiene en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que San Juan tiene una tasa de actividad menor.

La presión para el ingreso a la administración pública es superlativa; y esto no sólo se debe a las altas tasas de desocupación sino también al mayor salario pagado y a una brecha cada vez amplia entre las características del sistema privado y el sistema público. En el primero, rigen reglas crecientemente “salvajes”, tendencias a la precarización y sobreexplotación de la fuerza de trabajo; mientras que en el sector público se mantienen las condiciones de trabajo y la duración de la jornada laboral que estaban vigentes en la etapa del *estado benefactor*. Si no se puede acceder a un empleo, la incorporación a diferentes programas de carácter asistencial ocupa el lugar siguiente en la escala de interés de buena parte de los sanjuaninos. De hecho, los programas de emergencia laboral (Planes Trabajar, más tarde Jefas y Jefes de Hogar) o la asistencia alimentaria resultan cruciales para la supervivencia de buena parte de la población.

Puestos los elementos de esta forma, están dadas las condiciones para la generación de aparatos clientelares de amplísima extensión y efectividad, en donde el acceso a los bienes públicos se encuentra intermediado por un puntero político que los reparte en función de la incorporación del beneficiario a la red política propia.

La relación con el gobierno nacional

Como en toda estructura federal, un elemento clave de la política provincial tiene que ver con los diferentes modelos de relación que establecen los gobiernos provinciales con las autoridades nacionales.

En este aspecto, el bloquismo tiene como uno de sus principales activos el haber logrado construir una red de relaciones con actores sociales y políticos que actúan en el ámbito nacional. A partir de esta red, los funcionarios bloquistas se presentan como los gestores políticos más adecuados a partir de su reconocida capacidad de seducción, tensión, enfrentamiento y acuerdo frente al gobierno central. Sus logros cotidianos en la defensa de la vitivinicultura provincial, la obtención de cupos en la promoción industrial, la presencia provincial en cuanto programa de fomento productivo existiese y la gestión exitosa de monumentales obras públicas dan cuenta de la capacidad de este grupo político de representar los intereses provinciales.

Durante el gobierno de la UCR (1983-1989) estos atributos pasaron a ser, paulatinamente, menos importantes, pero de alguna forma se compensan por el papel que cumplen los dos senadores bloquistas ante la debilidad del gobierno central en la cámara alta. Para decirlo de otra manera, cada vez que el ejecutivo necesita aprobar una ley, como los votos de estos senadores sirven para inclinar la situación a un lado u otro, es común que a cambio de acompañar al bloque oficialista se obtengan partidas extraordinarias de programas sociales u obras públicas.

Con la llegada de Menem a la presidencia de la nación (1989), el oficialismo nacional deja de tener dificultades en la cámara alta (en donde el PJ tiene mayoría propia), por lo que los senadores bloquistas pierden casi todo su valor.

El gobierno de Jorge Escobar (que asume por primera vez en el año 1991) redefine la relación de la provincia con las autoridades nacionales, presentándose ya desde la

campaña electoral con un alineamiento absoluto con el presidente de la nación y su poderoso ministro de Economía, Domingo Cavallo. El nuevo gobierno de San Juan – como casi todos los oficialismos de las provincias periféricas de la época– establece como una de sus principales prioridades obtener la mayor cantidad posible de transferencias desde el gobierno nacional. Así, construye un patrón de sobreasignaciones per cápita que tiene, hacia el final del gobierno de Escobar, un nivel del orden del 40% superior al que obtienen las provincias del área central (Presupuesto Nacional, 1999).

Ahora bien, ¿en qué medida el alineamiento de Escobar permite diseñar este patrón? En una serie de entrevistas realizadas a funcionarios que cumplen funciones de rango ministerial durante los noventa, estos consideran de manera casi unánime que esta situación es clave. Reproducimos en extenso sus respuestas pues son particularmente reveladoras de la situación: “Nosotros teníamos una carta de presentación inmejorable, que era que estábamos alineados con Menem [...] Cuando venía alguien de San Juan, la carta de presentación era Escobar-Menem. Esto era sabido, incluso en los niveles más bajos”. “Bueno, yo recuerdo que venir de San Juan era una cuestión muy importante, nos ponían alfombra roja [...] estábamos jugando en primera”. “La provincia de San Juan era muy bien vista en esa época [...] había un muy buen *feeling* entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, entonces daba gusto ir a cualquier despacho nacional [...] cuando uno iba a la oficina de algún Ministerio veía las antecámaras que les hacían hacer a otras provincias; pero llegaba uno de San Juan y era al primero que atendían”. “Tener afinidad política ayudaba a tener buena relación, a conseguir recursos. Hay un esquema de trabajo, pero si vos tenés acercamientos, algún tipo de relación política, como pasó con Escobar y Menem, eso siempre ayuda”. “Éramos los niños mimados del gobierno nacional, por lo tanto era poco el esfuerzo para entrar a un despacho, para tener acceso al ministro...”. “Durante mi gestión, el gobernador era una persona con mucha llegada a la Presidencia de la Nación y con amigos en todo el esquema del gobierno nacional.

La fluida articulación nación-provincia de San Juan se basa prioritariamente en patrones de lealtad diferentes a la continua tensión-distensión de la etapa bloquista. Como ejemplifica un entrevistado al referirse a las posibilidades de negociar un acuerdo en el máximo nivel: “No ofrecíamos nada porque no teníamos conflicto a solucionar. No podíamos proponer alinearnos a una política porque ya los estábamos”

La relación con el gobierno central, que anteriormente tuvo como prioridad gestionar la continuidad del emprendimiento vitivinícola, se aboca ahora a la obtención de crecientes transferencias financieras y de bienes-programa. Nótese que cambian los actores sociales que sostienen la política provincial, ya que de agentes económicos capaces de articularse para desempeñar una producción se convierten en actores políticos que se apropian parasitariamente de los recursos del estado provincial. Como consecuencia, se acentúa la tendencia hacia un creciente pragmatismo en los oficialismos provinciales; mientras se envían cada vez más transferencias, cualquier política nacional puede ser apoyada.

Para el gobierno central, por su parte, el poder de las provincias las convierte en aliadas cruciales a la hora de organizar la continuidad del proceso de ajuste estructural. En línea con conseguir su sostén, desarrolla un tipo de articulación basada en la seducción de los funcionarios de las provincias periféricas con transferencias financieras o de bienes y servicios.

Las diferencias de escala y de ingreso per cápita hacen que este mecanismo se desarrolle con especial facilidad en el caso de las provincias del área periférica. Dicho de otro modo, una suma de dinero que en términos relativos puede ser poco significativa para el

presupuesto federal representa, para cualquier provincia periférica, un elemento determinante de su situación fiscal y/o económica. Por otro lado, el alineamiento provincial (votos en el parlamento nacional, apoyo en la interna partidaria, reducción del nivel de enfrentamiento interpartidario, etc.) es medular para el gobierno central, mientras que para la provincia adoptar una política independiente tiene, potencialmente, pocos beneficios³⁸.

Según los entrevistados, el gobierno de San Juan se muestra muy hábil para alinearse y realinearse de acuerdo a las vicisitudes que ocurren en el ámbito nacional. De esta forma, más allá de la invariable referencia a Menem, la articulación con otros actores del ámbito nacional van cambiando de acuerdo a la situación que tienen. Así, del alineamiento Menem-Cavallo de 1991, se convierte en Menem-Corach (ministro del Interior) en 1995. Es notorio de qué manera estos realineamientos generan cambios en el acceso a fondos que maneja cada área. Así, los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) remesados a San Juan pasan de 2,6 millones a 27,7 millones de pesos³⁹; lo que eleva la participación de la provincia en la distribución de 0,6% en 1994 a 6,5% en 1999 (ProvInfo, 2004). Estos fondos son manejados por el Ministerio del Interior, y muestran cómo suben las acciones del gobernador Escobar en esta jurisdicción a partir de la ruptura con el ministro Cavallo y el acercamiento a los contendores del ministro de Economía.

Estos realineamientos no son neutros en términos de las políticas que se impulsan ni en cuanto a los equilibrios internos del propio gobierno provincial. Conviene retener estos datos, ya que tienen influencia en los hechos que desembocan en el sanjuanazo.

Las turbulencias. Los prolegómenos del estallido

Hacia principios de la década del ochenta, cuando la dictadura comienza a preparar su retirada, se produce una serie de acuerdos entre el gobierno militar y diferentes partidos políticos. Como parte de estos acuerdos, Leopoldo Bravo es designado como gobernador de facto hacia fines del año 1981. Desde esta posición de privilegio, y con una prudente pero altamente efectiva utilización de los resortes del estado, el bloquismo revalida su supremacía electoral en ocasión de la reinstauración de las instituciones constitucionales de 1983. Esta preeminencia se extiende al segundo período gubernamental (1987-1991), en donde debe apelar a un candidato extrapartidario y a una serie de recursos de último momento para poder sostenerse en el poder⁴⁰.

Al respecto, es necesario hacer notar que el escenario electoral provincial no tiene la conformación bipartidista de la mayoría de las provincias argentinas durante los ochenta y los noventa. En San Juan, además de los partidos nacionales con presencia en todas las jurisdicciones –la UCR y el PJ– se observa una importante presencia de varias fuerzas provinciales y municipales.

Bajo esta estructura, los comicios para gobernador de 1991 muestran un cambio con respecto a las elecciones de 1983 y 1987. En efecto, mientras que en tales elecciones el bloquismo se impuso a partir de un discurso *provincialista* que apuesta a la división del voto opositor entre la UCR y el PJ, en 1991 la aparición de otro partido regional –la Cruzada Renovadora– divide el electorado local, mientras que el otro segmento se polariza a favor del PJ en detrimento de una UCR en crisis por cuestiones de índole nacional. Los resultados finales muestran un empate técnico entre tres fuerzas electorales: la Cruzada Renovadora, el Partido Bloquista y el Justicialismo. Este último partido es quien gana las elecciones, accediendo al cargo de gobernador Jorge Escobar, un empresario sin antecedentes políticos.

La asunción del nuevo gobierno provoca una moderada expectativa. El discurso de campaña habla de renovar ciertas prácticas políticas –las del Partido Bloquista– como así también incorporar a la provincia al proceso modernizador que lidera el ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Sin embargo, su posición era débil. Gana por un margen muy estrecho de votos, y debe enfrentar a la poderosa maquinaria bloquista que se hace fuerte en el Parlamento, donde el oficialismo es minoría. Por otro lado, a poco de comenzar el gobierno queda claro que la estructura del PJ, liderada por el vicegobernador, no se siente cómoda con Escobar. Adicionalmente, en sus primeros pasos, el novato gobernador comete una serie de errores que lo aíslan políticamente, a la vez que graves hechos de corrupción que lo involucran salen a la luz. Finalmente, poco después de cumplir un año de gobierno –en diciembre de 1991– es desplazado de su cargo a través de un juicio político.

Si el gobierno de Escobar es débil, el de su sucesor –el hasta ese entonces vicegobernador Juan Carlos Rojas– lo es más, ya que a la baja proporción de diputados oficialistas en el parlamento provincial, se le agregan problemas de su limitada popularidad y legitimidad. Es que es muy mal visto que este sector del PJ haya sido el que encabece la operación de destitución de un gobierno que, pese a todo, tiene un alto grado de imagen positiva. Se produce así una situación en donde el depuesto gobernador se instala en el lugar de víctima de una maniobra, mientras que Rojas no puede revertir su imagen de victimario a pesar del extraordinario incremento del gasto aplicado a un sinnúmero de acciones.

El gobernador saliente reafirma su popularidad en los comicios de 1993 (elección de legisladores nacionales) y 1994 (elección de convencionales constituyentes nacionales) en donde triunfa a pesar de presentarse por fuera del Partido Justicialista y de enfrentar abiertamente al gobierno provincial.

La debilidad del gobernador Rojas lo empuja a un desesperado *rush* por consolidar el apoyo de la estructura justicialista, de los intendentes municipales y de los partidos de la oposición que advierten que la suerte del gobernador está echada. En este intento, incrementa de manera descomunal el gasto público al promover, entre otras cosas, el ingreso de aproximadamente 7.000 nuevos empleados al estado; el incremento del gasto llega a generar un déficit del orden del 40% de los ingresos.

Hacia el último trimestre del año 1994, cuando los primeros embates del “tequila” producen un derrumbe de los ingresos provinciales, la situación de las cuentas fiscales ya son insostenibles. Las dificultades para pagar salarios profundizan un malestar que hasta entonces sólo se expresa través del voto, comenzando a instalarse un escenario de agitación política. Es que en las provincias periféricas, la amplia incidencia del Estado en la vida económica provincial hace que su retracción provoque un generalizado corte en la cadena de pagos.

De esta época es el surgimiento del Frente Social, un grupo de organizaciones encabezado por sindicatos y colegios profesionales que lidera la protesta. Este liderazgo tiene sus contramarchas y disidencias internas, ya que el sindicalismo y la representación corporativa son esencialmente peronistas y no quieren enfrentarse abiertamente a un gobernador de tal signo, máxime cuando este tiene un discurso relativamente refractario al ajuste que se desarrolla en la órbita nacional.

A despecho de tal situación, tímidamente primero y con más fuerza después, comienzan a motorizarse importantes movilizaciones que sacuden la paz cotidiana. Se trata de una experiencia novedosa en una provincia en donde hace años que no se desarrollan conflictos político-sociales, en donde la participación popular juega un papel determinante.

La baja popularidad, las movilizaciones populares y el aislamiento nacional –Cavallo califica al gobierno provincial como “un desastre” y el diputado César Arias, en representación del Consejo Nacional del PJ estima que “la situación era próxima a lo crítico” (Interdiarios, 1994a)– hacen prever una pronta salida de Juan Carlos Rojas del poder. La situación se define a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia sanjuanina, que considera nulo el juicio político a Jorge Escobar y lo repone en el gobierno el 30 de septiembre de 1994, dos años después de su caída.

Escobar, segunda parte

Con el regreso de Escobar al gobierno, en la provincia se observan dos novedades:

- La amplia apoyatura que consigue el nuevo gobierno de parte del Estado nacional. En la semana que retoma el cargo es recibido por el presidente Carlos Menem, el ministro del Interior, Carlos Ruckauf, el secretario general de la Presidencia, Eduardo Bauzá, y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien, además, le envía una partida extraordinaria de 10 millones de pesos para poder hacer frente a los sueldos de diciembre.
- El alineamiento con el ajuste promovido por la Nación. En su asunción, Escobar advierte que “habrá una cirugía mayor” (Interdiarios, 1994b; 1994c), refiriéndose al agudo ajuste fiscal que piensa realizar⁴¹.

El plan estratégico del ajuste y la gestión de sus contenidos más álgidos, es llevado a cabo por una serie de cuadros técnico-políticos concentrados en el ministerio de Economía y jefatura de Gabinete de la provincia que, a despecho de su nacimiento en la provincia, llegan desde Buenos Aires. Estos funcionarios se muestran abiertamente como aliados políticos e ideológicos del ministro de Economía de la nación, Domingo Cavallo.

Frente a este segmento se agrupa una serie de cuadros históricos del PJ que habían acompañado a Escobar en su amargo retiro post destitución, y que conforman los principales puentes del gobernador con el partido. Este sector, expresión típica de lo que son las seccionales provinciales del PJ, se caracteriza por una ideología difusa y pragmática, que hace que sus posicionamientos políticos varíen continuamente tras el objetivo principal de apropiarse de crecientes espacios de poder⁴².

Este último sector tiene lazos con el Frente Social, el grupo de organizaciones que lideran las jornadas de lucha de fines de 1994 contra al entonces gobernador Rojas. El Frente mantiene una actitud expectante ante el desenlace político de la interna peronista, y ya en los primeros meses de 1995 se empieza a reactivar para enfrentar el plan de ajuste lanzado por Escobar.

Aunque el gobernador aparece por encima de las inevitables tensiones que cotidianamente ocurren entre ambos sectores, puede decirse que hasta las elecciones de mayo de 1995 –que significan, paralelamente, la reelección de Menem y de Escobar– el gobernador apuntala fundamentalmente al sector *técnico*. Como vimos anteriormente, con tal elección se abre un período de cambios que, en el orden nacional, implica un paulatino debilitamiento del ministro Cavallo, y en el orden provincial un creciente poder del segmento *político*.

Retomemos la crónica de los hechos en los primeros meses del año 1995, cuando las primeras fases del despliegue del programa de ajuste no hacen mella sobre la popularidad del gobierno. El primer gran test en este sentido son las elecciones de todas las autoridades provinciales el 14 de mayo de 1995, cuando Escobar obtiene un

abrumador triunfo para los estándares sanjuaninos, acostumbrados a elecciones relativamente parejas. Los análisis del momento explican este triunfo como un mandato para que el gobernador, ajuste mediante, garantice la continuidad del pago de salarios a los empleados públicos y la cadena general de pagos en la provincia, en un fenómeno en alguna medida paralelo al que en ese momento se presenta con las elecciones presidenciales⁴³.

Los análisis también recalcan que Escobar logra alinear a todo el PJ detrás de su candidatura; y que el Frente Social va a deshilvanarse cada vez más con el retiro del ala sindical, ahora disciplinada hacia el nuevo líder indiscutido del peronismo.

En definitiva, hacia principios de junio todo parece indicar que el gobierno tiene la situación bajo control. Logra un rotundo triunfo electoral en medio de un ajuste muy violento, reagrupando a todo el PJ detrás de sí. Por otro lado, su hábil realineamiento con la Nación lo mantiene como un interlocutor privilegiado del poder central. La protesta social, a su vez, aparece vencida a partir de los resultados de los comicios y de su división interna. Por último, si bien la situación fiscal plantea varias batallas pendientes, se tiene esperanza que el mandato obtenido le permita superar el desafío. Este escenario casi idílico para el gobierno cambia bruscamente hacia fines de julio. Veamos que ocurre.

El sanjuanazo

Como una especie de telón de fondo que potencia la debilidad del gobierno de Juan Carlos Rojas y condiciona el desarrollo del ajuste llevado a cabo por Escobar, está en curso la llamada *crisis del tequila*, que hace que casi todas las provincias sufran agudos desequilibrios fiscales. El mes de julio es tal vez uno de los más críticos de todo el período; además de los procesos que veremos en detalle referidos a la provincia de San Juan, hay programas de ajuste draconianos, tumultos o asistencias de urgencia en Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Misiones y Río Negro⁴⁴. En este escenario, y con la legitimidad del triunfo electoral, el ala *técnica* del gobierno considera que se dan las condiciones para desplegar una serie de medidas tendientes a lograr el definitivo arreglo de las cuentas fiscales de la provincia. Tras esta perspectiva, la mayoría oficialista aprueba en la legislatura provincial una ley de emergencia económica, financiera, administrativa y previsional que autoriza la rebaja salarial, la emisión de bonos, la eliminación de organismos del estado, el lanzamiento de un plan de retiro voluntario y la transferencia de la Caja de Jubilaciones al estado nacional. Esta normativa, aprobada a principios de junio, se concreta a pesar del voto en contra de toda la oposición y del antagonismo de sindicatos y de colegios profesionales ligados al estado.

Sin embargo, el ejecutivo no transforma inmediatamente esta ley en medidas concretas. ¿Dudas ante la posible reacción, o un *impasse* para resolver la puja interna? La cuestión es que, como en casi todas las jurisdicciones, no hay recursos para pagar los sueldos – con ajuste o sin ajuste– por lo que el ambiente comienza a enrarecerse. El 13 de julio manifestantes del Frente Social apedrean el Ministerio de Economía de la provincia en reclamo del pago de sueldos y aguinaldo.

Con el correr de los días la tensión crece, hasta que el 24 de julio, finalmente, se hace efectivo el elemento más crítico de la Ley de Emergencia Económica: se establece una reducción de los salarios de más de 400 pesos en un 20%, salvo los de los docentes, que se reducen en un 30%. Paralelamente, se anuncia que los sueldos de junio y el medio aguinaldo serán pagados en cuotas a partir de septiembre.

Con esta medida, el sector *ajustista* piensa terminar definitivamente con el déficit. El principal argumento para defender las medidas es que la única alternativa a la reducción salarial es el despido de “nueve mil trabajadores del Estado” (Interdiarios, 1995b). Funcionarios del gobierno revelan que se decide sincronizar el lanzamiento de estas medidas con el pago de una parte de los salarios atrasados, para lo cual se recibe asistencia financiera de la Nación. Sin embargo, al tener que utilizar como vía de ingreso de esos fondos al banco provincial –exclusivo agente financiero de la provincia–, este se queda con esos fondos para superar su propia crisis financiera. En el momento más delicado de la crisis, el banco provincial le debía 63 millones de pesos al estado provincial, el equivalente a dos meses de gasto salarial provincial⁴⁵ (Página 12, 1995a; 1995c).

¿Por qué se lanzan las medidas en ese momento? Los entrevistados ofrecen varias respuestas. Por un lado, porque es la condición que pone el Ministerio de Economía de la Nación para dar financiamiento extraordinario. Pero también, el ala *ajustista* especula con que el escenario de extrema penuria fiscal y tensión social juegue a su favor en el disciplinamiento del ala política. En este contexto, la confluencia de medidas de ajuste, atraso salarial y baja cobertura política desata una ola de disturbios como nunca antes se había visto.

La protesta de los sindicatos nucleados en el Frente Social comienza en la noche del martes 25, con la ocupación de los ministerios sanjuaninos. El miércoles 26 de julio se producen los incidentes más graves, alcanzando su cenit cuando manifestantes del Frente Social –liderados por el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA)– ocupan la sede del Ministerio de Desarrollo Humano (ex Acción Social), rompiendo muebles y vidrios e intentando incendiar el edificio.

Los hechos incluyen destrozos e incendio de vehículos, roturas de vidrieras, saqueos de algunos comercios y choques con efectivos de la policía provincial. Un grupo de manifestantes rompe a pedrazos las vidrieras de una concesionaria Ford, propiedad de la familia del gobernador Jorge Escobar, y el edificio 9 de Julio, sede del Ministerio de Economía de la Provincia, se mantiene tomado por militantes de ATE durante todo el día.

El saldo de los enfrentamientos es de una veintena de heridos y una decena de detenidos. Por la noche, el gobierno provincial debe pedir ayuda a la gendarmería y a la policía federal en prevención de que hechos similares pudieran repetirse al día siguiente (Interdiarios, 1995b).

Tras los disturbios, se lanza un paro general apoyado por todas las ramas del sindicalismo nacional (CGT, MTA y CTA) y los gremios estatales, el que, combinado con un asueto, declarado de apuro, para la administración pública y el poder judicial, tiene acatamiento masivo. El viernes 28 unos tres mil manifestantes se concentran frente a la catedral, sin que se produzcan incidentes, y Héctor Sánchez, de ATE, una de las caras visibles del sanjuanazo, anuncia un plan de lucha mientras afirma que “el conflicto recién empieza y ahora menos que nunca vamos a aflojar” (Página 12, 1995b: 4); y agrega: “para la otra semana, estamos seguros, esto se convertirá en un estallido de tipo nacional” (Interdiarios, 1995d).

En ese momento, en el gobierno empieza a ser visible la puja entre los que quieren negociar una salida decorosa de la tensa situación y aquellos que promueven una rendición completa. Esta controversia se refleja en el propio gobierno nacional: un funcionario provincial que trata la crisis con la Nación, nos comenta que “mientras Economía nos decía que aguantáramos, Interior nos conminaba a que arregláramos a como diera lugar” (Cao, 2003: 44).

En este escenario, el ala política toma la iniciativa. La legislatura provincial da marcha atrás y sanciona una ley (la N° 6.619) que prohíbe la reducción salarial. La norma se aprueba con los 22 votos de la oposición (Cruzada Renovadora, Partido Bloquista y UCR) y, notoriamente, 14 del oficialismo (Oficina de Prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1995b). El vicegobernador Rogelio Cerdera –la cara más visible de esta ala– expresa: “es hora de que nos sentemos todos los que somos responsables, esto es, el gobierno, dirigencia sindical, dirigencia empresaria, la iglesia... para asegurar una convivencia armónica en esta provincia” (Interdiarios, 1995e). No es necesario hacer muchos esfuerzos para notar el cambio de actitud en comparación con el decisionismo que caracteriza el lanzamiento de la ley de emergencia en particular y todo el período en general.

Finalmente, tras una nueva huelga general realizada, con gran acatamiento, el jueves 3 de agosto, la gobernación da marcha atrás y deja sin efecto descuento alguno.

Emblemáticamente, Alfredo Duarte, secretario general de ATSA, que aparece en las filmaciones del 26 de julio en el incendio del Ministerio de Desarrollo Social⁴⁶, es quien confirma que se ha llegado a un entendimiento (Interdiarios, 1995c).

Sólo continúan con su protesta los empleados y obreros sanjuaninos agrupados en ATE, quienes rechazan la oferta del gobierno. Pero el estallido nacional no se produce; agosto es el mes donde comienza a mejorar el escenario fiscal y la lucha provincial se diluye a favor del apoyo incondicional de la burocracia sindical al gobierno y el archivo definitivo de los planes de ajuste.

Consecuencias del sanjuanazo

Visto desde una perspectiva de corto plazo, la primera consecuencia es el cambio en el equilibrio interno del gobierno de Escobar, que pasa a estar hegemonizado por el ala política. A pocos meses de los hechos, la mayoría de quienes promueven el ajuste estructural no sólo salen del gobierno, sino que vuelven a sus ocupaciones en Buenos Aires.

Siempre ha quedado la duda acerca del papel de los sindicatos que responden al PJ en los hechos ocurridos. Sin pretender explicar la situación a través de teorías conspirativas, resulta bastante claro que tuvieron piedra libre por parte del ala política para presionar al gobierno en pos del desgaste del ala *ajustista*. Sin embargo, cuando la situación se les escapó de las manos, rápidamente acordaron con Escobar una salida para descomprimir un conflicto que supera por mucho los límites previstos.

También parece cierto que hubo una mala evaluación de la situación por parte del ala *ajustista*, al suponer que su protagonismo en el triunfo electoral les daba la oportunidad de profundizar su proyecto político, como así también hacerle pagar al ala política el costo del atraso en el pago de salarios. El carácter tecnocrático de los funcionarios que no vive en la provincia –cabe agregar que este hecho no es *bien visto* en San Juan– y la baja inserción en las organizaciones populares, los llevó a minimizar las consecuencias de profundizar las medidas de restricción del gasto.

Ahora, analizados estos mismos hechos desde un enfoque más estructural, el sanjuanazo saca a la luz las potencialidades y limitaciones del nuevo esquema sociopolítico que comienza a construirse a partir de mediados de los años setenta. Como ya se explicara, las transformaciones iniciadas en esa época implican cambios en el pacto social que sostiene el sistema político regional; en la etapa anterior, el gobierno provincial tiene como principal tarea sostener la economía regional, mas luego su accionar pasa a centrarse en la obtención de crecientes recursos que transfiere el Estado nacional, cuya

asignación entre actores sociales y políticos provinciales, configura el principal elemento de la gobernabilidad provincial.

Ahora bien, la crisis fiscal a partir del “efecto tequila” devela los límites de llevar adelante políticas como las descriptas: cuando el ciclo económico hace que se reduzcan los recursos que recibe, debe producir un ajuste que ataca directamente a su principal base de sustentación. Adicionalmente, se observa un drástico acotamiento en las posibilidades de exportar el conflicto político hacia el ámbito nacional, tal como ocurre en la etapa anterior. Podemos decir que Escobar no puede hacerlo porque basa buena parte de su fortaleza en mostrarse como el mejor aliado del gobierno central. Pero, además, considerando que se rompe el discurso productivista que permite una apelación al orden nacional –básicamente el que sostiene que el gobierno central está fijando reglas lesivas para la vitivinicultura a favor de otros actores regionales– el papel mendicante que le cabe a la contraparte provincial hace más difícil la construcción de un contradiscurso.

Más importante que todo lo dicho es el surgimiento de un nuevo actor en el escenario político provincial. Las movilizaciones de julio de 1995 tienen tal importancia que el vicegobernador de la provincia debe reconocer que se trata de un fenómeno inédito en San Juan (Interdiarios, 1995b). Más allá del papel que desempeñan los diferentes espacios superestructurales –muchos de ellos primero promoviendo la protesta y luego desalentándola– la dimensión que toman los hechos demuestra que las condiciones cambian de manera sustancial. En efecto, el nivel de masividad y combatividad con que se expresa una importante porción de la población provincial, deja a las claras que opera en la sociedad regional con un potencial movilizador latente listo para expresarse en la organización de los sectores populares de la provincia.

Consideraciones finales

Abundan, como ya dijimos, los estudios que dan cuenta de la emergencia y persistencia del fenómeno de la protesta social. Sin embargo, no existe una correlación entre la producción de estos análisis en el área pampeana respecto de las provincias. Por ello, la necesidad de conocer las acciones colectivas y el desarrollo de la política en subinstancias nacionales nos motivan a presentar esta contribución, – en esta primera etapa – a partir de tres casos: Neuquén, Río Negro y San Juan. En los análisis se atiende no sólo a la constitución del poder y el desenvolvimiento de las provincias, sino también a la causalidad compleja que opera en la acción de protesta, sin descuidar el repertorio de formas culturales a través de las cuales, la sociedad interpreta estos fenómenos y actúa en concordancia con ellos.

En este sentido, por lo menos durante la década del noventa, los conflictos en las provincias del estudio se trasladan al centro, con diferentes estrategias y retóricas. Se utilizan enunciados como *enfrentamiento entre federalismo y centralismo ó provincias vs. poder central*, tanto en Neuquén como en San Juan; en cambio, en Río Negro, surge siempre la negociación entre las dos instancias. En definitiva, tras los enunciados de federalismo o la negociación directa, los conflictos en las áreas periféricas respecto de la pampeana, no logran resolver los problemas que las políticas nacionales y/o provinciales provocan en el interior de sus sociedades.

En los tres espacios subnacionales, los conflictos tienen como disparador un elemento común: la lucha por la apropiación de la renta estatal. Cuando se producen los reflujos económicos, los estados ponen en marcha los ajustes fiscales. Esto repercute firmemente en las sociedades sanjuanina y rionegrina, no tanto en Neuquén, que por su

renta petrolera puede hacer frente a determinadas políticas nacionales y beneficiarse, incluso, con el alza del petróleo a nivel internacional.

La heterogeneidad espacial, mayor en Río Negro que en Neuquén, se corresponde con la homogeneidad política, mayor en Neuquén que en Río Negro, mientras que San Juan muestra un sistema político muy complejo, en el que no logra consolidarse ningún partido después del medio siglo de predominancia del bloquismo.

Respecto a los sujetos sociales y sus acciones de protesta, frente a la falta de respuesta de los estados locales es dable observar que, en los casos estudiados, lideran la protesta los trabajadores de la administración pública y sus respectivos gremios. A esto, se debe agregar que, en Río Negro, por su propia división espacial y productiva, operan otros sujetos, sectores medios burgueses, con actuación importante en determinadas coyunturas económicas y políticas. Respecto de los piqueteros, es evidente que el impacto más importante se da en Neuquén, son hombres y mujeres desocupados; en segundo término Río Negro y, por último, en San Juan, donde son marginales respecto de las dos anteriores.

Por último, es importante subrayar que este tipo de trabajo muestra que no es posible analizar la periferia con las categorías del centro y al resto del país desde el área pampeana; de allí, nuestra contribución a repensar las provincias, los sujetos sociales y sus acciones de protesta.

Bibliografía

Aiziczon, Fernando 2004 “La experiencia de los obreros de la cerámica Zanón, Neuquén, 1983-2002”. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

Balbe, Beba 1989 “Introducción”, en Aufgang, Lidia *Las puebladas: dos casos de protesta social. Cipolletti y Casilda* (Buenos Aires: Centro Editor de América Latina), N°8.

Auyero, Javier 2002 “Los cambios en el repertorio de la protesta social en Argentina” en *Desarrollo Económico* (Buenos Aires: IDES) N° 166, julio-setiembre.

Basualdo, Eduardo y Azpiazu, Daniel 2002 *El proceso de privatización en Argentina* (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes/Página 12).

Cao, Horacio 2003 “La especificidad del Estado y la Administración Pública en las provincias del área periférica de la República Argentina”. Tesis de Doctorado, Comisión de Doctorado, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires.

Cao, Horacio y Rubins, Roxana 1998 “La cuestión regional y la conformación del Estado-Nación en la Argentina” en *Cuaderno de Investigación* (Buenos Aires: CEPAS/AAG).

Cao, Horacio y Vaca, Josefina 2004 “La división regional del trabajo en la Argentina: nuevos elementos y tradicionales desequilibrios” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 202.

Cao, Horacio; Favaro, Orietta e Iuorno, Graciela 2003 “Las provincias argentinas. Estado, territorio y sociedad en las últimas décadas”, mimeo.

Castellar, A y Gallardo, M. 2002 “Cutral-Co, 1958 ¿Huelga petrolera o primera pueblada?”. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

CELS 2003 *El Estado frente a la protesta social* (Buenos Aires: CELS-Siglo XXI).

De la Garza Toledo, Enrique (comp.) 2001 *Los sindicatos frente a los procesos de transición política* (Buenos Aires: CLACSO).

Chomsky, Noam 2001 *El bien común* (México: Siglo XXI).

Delamata, Gabriela 2002 “De los ‘estallidos’ provinciales a la generalización de las protestas en Argentina. Perspectiva y contexto en la significación de las nuevas protestas” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 182.

Delamata, Gabriela 2004 *Los barrios desbordados* (Buenos Aires: EUDEBA/Libros del Rojas) N° 8.

Farinetti, Marina 2002 “La conflictividad social después del movimiento obrero” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 182.

Favaro, Orietta 1998 “La privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Los efectos en áreas petroleras de provincias. El caso del Neuquén” en *Revista de Historia* (Neuquén: Universidad Nacional del Comahue) N° 7.

Favaro, Orietta (ed.) 1999 *Neuquén. La construcción de un orden estatal* (Neuquén: UNCo-CEHEPYC).

Favaro, Orietta 2002 “Neuquén. La sociedad y el conflicto” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 185.

Favaro, Orietta et al. 1997 “La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 148.

Favaro, Orietta y Aiziczon, Fernando 2003 “Al filo de la cornisa. La resistencia obrera en la fábrica Zanon, Neuquén” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 197.

Favaro, Orietta y Arias Bucciarelli, Mario 1994 “Efectos de la privatización de YPF: ¿la desagregación territorial del espacio neuquino?” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 127.

Favaro, Orietta y Arias Bucciarelli, Mario 1999 “El sistema político neuquino. Vocación hegemónica y política facciosa en el partido gobernante” en Favaro, Orietta (ed.) 1999 *Neuquén. La construcción de un orden estatal* (Neuquén: UNCo-CEHEPYC).

Fulvi, Nilo et al. 1981 *Río Negro, pasado y presente* (Buenos Aires: Gráfica Moncayo).

Giarracca, Norma et al. 2002 *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país* (Buenos Aires: Alianza).

Interdiarios 1994a “Afirman que la situación sanjuanina ‘está muy próxima a lo crítico’” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].

Interdiarios 1994b “Crisis en San Juan” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].

Interdiarios 1994c “Escobar asumirá en San Juan con 10 millones para pagar sueldos” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].

Interdiarios 1994d “Escobar sostuvo que el Gobernador de San Juan debe renunciar” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].

Interdiarios 1994e “Escobar: El Frente de la Esperanza representa el proyecto Nacional” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].

Interdiarios 1995a “Bernardo Neustadt con Jorge Escobar” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].

- Interdiarios 1995b “Daniel Hadad con Raúl Benítez” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].
- Interdiarios 1995c “Marcelo Bonelli con Alfredo Duarte” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].
- Interdiarios 1995d “Marcelo Longobardi con Héctor Sánchez” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].
- Interdiarios 1995e “Pepe Elisachev con Rogelio Cerdera” en *Cinco años de noticias de la República Argentina y el Mundo* (Buenos Aires: Interdiarios) [Base de noticias periodísticas en CD-ROM].
- INV-Instituto Nacional de Vitivinicultura 2002 “Síntesis Básica de Estadística Vitivinícola Argentina. Datos Definitivos”, Mendoza.
- Iñigo Carrera, Nicolás 2001 *Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 33.
- Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2000 *La protesta social en los '90. Aproximación a una periodización* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 27.
- Iuorno, Graciela 2001a “El Alto Valle, entre la agricultura y los hidrocarburos” en *Río Negro* (General Roca).
- Iuorno, Graciela 2001b “La provincialización de los Territorios de Río Negro y Neuquén. Conflictos de intereses locales y nacionales”. VIII Jornadas de Interescuelas y Departamentos de Historia, Salta.
- Iuorno, Graciela 2003a “Entre uvas y mandolinas. Los inmigrantes europeos y la actividad vitivinícola en el Alto Valle del Río Negro (1930-1960)” en *Pueblos y Fronteras* (El Bolsón, Río Negro) Año 4, N° 4.
- Iuorno, Graciela 2003b “Las políticas y las acciones en área de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue, 1973-1976”. Tesis de Maestría en Educación Superior, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Comahue, Río Negro.
- Iuorno, Graciela 2004 “La pueblada de Senillosa. Sujetos sociales e intereses en juego”, mimeo.
- Lechner, Norbert 1996 “La política ya no es lo que fue” en *Nueva Sociedad* (Caracas) N° 144.
- Lizárraga, Fernando 2004 “Cuando la lismona es grande” en *8300. Periódico de Neuquén* (Neuquén) Año 2, N° 1.
- Lobato, Mirta y Suriano, Juan 2003 *La protesta social en la Argentina* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).
- López Maya, Margarita (coord.) 2002 *Protesta y Cultura en Venezuela: los marcos de acción colectiva en 1999* (Buenos Aires: CLACSO).
- López, Andrea y Thwaites Rey, Mabel 1990 “Auge y ocaso de la intervención estatal o la difícil legitimación de la ‘ley de la selva’, en *Doxa* (Buenos Aires), N° 2.
- Manzanal, Mabel 1980 “Lo aparente y lo real en la estrategia de desarrollo económico de la provincia de Río Negro_ 1958-1964”, en *Revista Interamericana de Planificación* (México: SIAP), N°53.
- Massaccesi, Horacio 2003 *Haceme Senador. Cinco décadas de política y periodismo en Río Negro* (Carmen de Patagones, Río Negro: Imprenta Minigraf).
- Minujin, Alberto y Anguita, Eduardo 2004 *La clase media: seducida y abandonada* (Buenos Aires: Edhasa).

Mombello, Laura 2003 “Neuquén, la memoria peregrina” en Jelin, Elizabeth y Langland, Victoria (comps.) *Monumentos, memoriales y marcas territoriales* (Madrid/Buenos Aires: Siglo XXI de España/Siglo XXI de Argentina).

Mouriaux, René y Sophie Beroud 2000 “Para una definición del concepto de ‘movimiento social’, en *OSAL* (Buenos Aires: Clacso), N°1.

Novaro, Marcos 1998 “Los partidos argentinos en los ‘90. Los desafíos de la competencia, la sucesión y la alternancia” en *Estudios Sociales* (Santa Fe) N° 15.

Novaro, Marcos y Palermo, Vicente 2003 *La dictadura militar 1976-1983. Del golpe de estado a la restauración democrática* (Buenos Aires: Paidós).

Núñez, Paula 2003 “Un municipio alejado, una actividad tangencial y los efectos de un profundo cambio institucional. San Carlos de Bariloche 1958-1970”. Tesis de Licenciatura en Historia, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

OECEI 1974 *La Argentina económica y social* (Buenos Aires: OECEI).

Oficina de Prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1995a *Microsemanario* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA) Año 5, N° 204, 10-16 de julio. En <<http://www.fcen.uba.ar/prensa/micro/1995/ms204a.htm>>.

Oficina de Prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 1995b *Microsemanario* (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / UBA) Año 5, N° 206, 24 de julio-6 de agosto. En <<http://www.fcen.uba.ar/prensa/micro/1995/ms206a.htm>>.

Oreja, Pablo 2000 *Luces y sombras del siglo XX* (General Roca, Río Negro: Ediciones Pastor).

OSAL 2000 (Buenos Aires: CLACSO), N° 1, N° 2.

OSAL 2001 (Buenos Aires: CLACSO), N° 3, N° 4, N° 5.

OSAL 2002 (Buenos Aires: CLACSO), N° 6, N° 7, N° 8.

OSAL 2003 (Buenos Aires: CLACSO), N° 9, N° 10, N° 11.

OSAL 2004 (Buenos Aires: CLACSO), N° 12, N° 13.

Página 12 1995a “A merced del Zonda” (Buenos Aires) 30 de julio.

Página 12 1995b “En San Juan sigue el paro estatal” (Buenos Aires) 1° de Agosto.

Página 12 1995c “La base económica de la bronca” (Buenos Aires) 30 de julio.

Pasquini, Laura y Remis, Claudio 2002 “La lógica política del corte de ruta en la Argentina. Estrategias de lucha e identidad” en *Estudios del Trabajo* (Buenos Aires: ASET) N° 24.

ProvInfo 2004 “Base de datos de la Unidad de Información Integrada-ProvInfo”, Secretaría de Provincias, Ministerio del Interior. En <<http://www.mininterior.gov.ar/provinfor/inicio.asp>> Acceso: 4 de mayo de 2004.

Rafart, Gabriel 2004 “Lucha en calles, lucha de clases. Cuestiones de método” en *Río Negro* (General Roca), 28 de febrero.

Río Negro 1969 (General Roca), 6 de septiembre.

Río Negro 1995a (General Roca), 3 de septiembre.

Río Negro 1995b (General Roca), 11 de septiembre.

Río Negro 1996 (General Roca), 24 de junio.

Río Negro 1997 (General Roca), marzo-abril.

Río Negro 2003 (General Roca), 21 de diciembre.

Río Negro 2004a (General Roca), 28 de marzo.

Río Negro 2004b (General Roca), 18 de abril.

Río Negro 2004c (General Roca), 20 de junio.

Río Negro 2004d (General Roca), 28 de junio.

- Rofman, Alejandro 2000 *Desarrollo Regional y exclusión social* (Buenos Aires: Amorrortu).
- Scatizza, Pablo 2004 “El largo camino de las movilizaciones populares” en *8300. Periódico de Neuquén* (Neuquén) 8 de julio.
- Seoane, Jose (comp.) 2003 *Movimientos sociales y conflicto en América Latina* (Buenos Aires: CLACSO).
- Spangaro, Néstor 1994 “El Rocazo: 22 años de olvido” en *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales* (General Roca, Río Negro: Universidad Nacional del Comahue), Año 2, N° 2.
- Sousa Santos, Boaventura 2001 “Los nuevos movimientos sociales” en *OSAL*, (Buenos Aires: Clacso), N°5.
- Zibechi, Raúl 2003 “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos” en *OSAL* (Buenos Aires: Clacso), N°9.

Notas

- * Docente e investigadora del Centro del Estudios de Estado, Política y Cultura (CEHEPYC), Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
- ** Docente e investigadora del Centro del Estudios de Estado, Política y Cultura (CEHEPYC), Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.
- *** Docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.

¹ En un trabajo anterior, presentado en la reunión del GT en La Habana, Cuba (2003), se elabora una propuesta de tipología de estados provinciales (Cao, Favaro e Iuorno, 2003). El tema es tratado en profundidad en Cao y Vaca (2004).

² La producción de crudo entre 1958 y 1963 coloca a Neuquén en el último lugar dentro de la Patagonia, con volúmenes insignificantes respecto de Chubut o Santa Cruz; igual situación se produce con el gas.

³ En el momento de la escritura de este trabajo, noviembre-diciembre de 2003, el precio del barril de crudo –debido a los conflictos internacionales– se eleva a más de 40 dólares, el valor más alto desde la guerra del Golfo (1991).

⁴ La gestión del gobierno neuquino apunta a inversiones en materia de gasoductos trascordilleranos (con Chile), en el turismo (con Brasil), inversiones de capitales locales en tierras y bodegas, en el ferrocarril trasandino, en obras hidroeléctricas en acuerdo con grupos económicos argentinos (Cartellone y Pescarmona, para el Chihuido II), etcétera.

⁵ No olvidemos que con la privatización de YPF la responsable de explotar el recurso en parte de la cuenca neuquina es Repsol, que tributa a la provincia el 12% de lo que extrae, el 88%, según Calleja, “unos dos mil millones de euros por año de utilidades liquidadas”, en *8300. Periódico de Neuquén*, Neuquén, 2004:1. Recordemos que Neuquén es la mayor productora de petróleo y de gas en el país.

⁶ En un informe publicado por *La Nación*, basado en un estudio de la Fundación Mediterránea, se señala el ingreso per cápita de cada distrito. El más alto, de 4.400

pesos por año, es el de Tierra del Fuego, le siguen Santa Cruz y Neuquén con 2.900 pesos. El más bajo corresponde a Buenos Aires, con 550 pesos por año.

⁷ Entendido en el sentido de un partido que, a través de sus fracciones burguesas, controla el estado provincial, enunciando intereses generales que son, en realidad, intereses particulares del grupo que gobierna y controla la subinstancia local, desdibujando la dominación a través del federalismo, pivote sobre el que se apoya para sacar al conflicto fuera de la provincia: colocarlo en el Estado nacional. Asimismo, opera con férreo control sobre los afiliados que ocupan cargos partidarios, sobre la “oposición” y sobre los empleados estatales.

⁸ La política local no inquieta al gobierno, que maneja la provincia “con piloto automático”; puede estar de vacaciones más de un mes que, a su regreso, encuentra todo es su lugar. La interna del MPN está adormecida y la oposición intenta organizar algo que, por ahora, sólo tiene un nombre (Alternativa 2007), unas cuantas voluntades detrás y una gran tarea para realizar si se pretende vencer al MPN dentro de tres años (*Río Negro*, 2004b: 25).

⁹ Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA)

¹⁰ Es de hacer notar que, en el año 2002, miembros de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA arriban a Neuquén y se entrevistan con los vocales del Tribunal Superior de Justicia, haciendo llegar su preocupación por la inactividad de la justicia neuquina y el número de procesados de la provincia. Hay más de 1.500 dirigentes, obreros y/o referentes sociales y mapuches en estos números. Por ejemplo, al secretario general de ATE, se le inician 50 causas penales; a Horacio Fernández de la CTA, 28; a Roberto Ñancuqueo de Confederación Mapuche, 15 causas (Scatizza, 2004: 12-13).

¹¹ La lucha facciosa en el interior del MPN (1990) divide al partido en dos líneas: la “amarilla” (sapagista) y la “blanca” (sobischista). Sobre este tema ver Favaro y Arias Bucciarelli (1999).

¹² La jueza se declara incompetente superada por la pueblada a la que califica como sedición.

¹³ Estos conceptos son enunciados por Felipe Sapag en el discurso inaugural al poder legislativo el 1° de mayo de 1997.

¹⁴ Para una mayor información sobre este tema ver Aiziczon (2004).

¹⁵ La desocupación en el conglomerado urbano Neuquén-Plottier descende (según estadísticas del INDEC de 2003) más de diez puntos, producto de la demanda de mano de obra en sectores de la producción, turismo, comercio y obra pública. Es necesario tener en cuenta que los subsidios diluyen la tasa de desocupación, por medio de los planes nacionales (Jefes y Jefas de Hogar) y provinciales (Ley 2.128 y Decreto 1.812, planes forestales de acción social, de la construcción, ferroviarios, etc.). Ver *Río Negro* (2003: 12).

¹⁶ El genocidio mapuche, que comienza con la denominada Conquista al Desierto, sigue con las diversas formas que se van adoptando desde la aculturación hasta la contaminación de sus tierras con hidrocarburos, pasando por la recurrente usurpación de las mismas. Las comunidades mapuches se organizan desde las últimas décadas para defender sus derechos (Newen Mapu, Confederación Mapuche Neuquina y el Centro de Educación que conforma la COM, Coordinadora de Organizaciones Mapuches). Desde su lugar, junto con las organizaciones de Derechos Humanos, son los más férreos defensores del medio ambiente. Respecto de estos últimos, en 1997 se crea un delegación de Madres de Plaza de Mayo y Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, con el impulso de Jaime De Nevares, que la preside hasta su muerte en 1995. También se encuentra HIJOS, la Corriente de Militantes, Zainuco –que se dedica a ayudar a las personas privadas de su libertad– y Hermanos, que trabaja por los desaparecidos.

¹⁷ Hay una pequeña disminución de la desocupación, obra de la mayor actividad en petróleo, construcción, turismo, servicios, y por el ingreso de una mayor coparticipación federal de impuestos y regalías hidrocarburíferas.

¹⁸ Es muy interesante observar, en términos absolutos, la relación cantidad de habitantes/empleados públicos provinciales/municipales/planes sociales –que puede ser visto como voto cautivo– y el desarrollo de situaciones, momentos y explosiones de conflicto en Neuquén, comparativamente con otras provincias argentinas, por ejemplo, Formosa, donde el 43% de los votantes son empleados públicos y reciben planes asistenciales, y no parece ser un estado de implosión o con conflictos permanentes (*Río Negro*, 2004c: 14).

¹⁹ La provincia tiene una superficie de 203.013 km² –representa el 11,48% de la región patagónica y el 5,39% de la superficie nacional– y según el censo nacional de 2001 cuenta con 552.822 habitantes.

²⁰ La producción petrolera de Río Negro puede aumentar hasta en un 50% con el descubrimiento en 1999 de nuevos yacimientos. En 1988 comienza a producir el pozo Estancia Vieja X-1 con una sugerencia natural de 364 m³ diarios (Iuorno, 2001a: 8).

²¹ Los inmigrantes y sus descendientes vinculados a la vitivinicultura y la ganadería logran una importante inserción socio-cultural e institucional, constituyendo parte de las clases dominantes (Iuorno, 2003a: 42-50).

²² Las empresas son: Galme (Pesquera), Cribsa (metal-mecánica), Toddy (alimenticia), Expofrut, De Benedictis, Productores Argentinos Integrados (PAI) –frutícolas–, Lahusen (textil), Coerpe, Sapse.

²³ Sierra Grande se encuentra ubicada en el Km 1.255 de la Ruta 3 y al sudoeste de la provincia de Río Negro. Su mina de hierro es una de las más grandes de Sudamérica, con 96 km de túneles y una profundidad de más de 500 metros. El muchas veces anunciado y nunca concretado asfaltado de la Ruta 23 le permitiría una comunicación más fluida con la parte oeste de la provincia.

²⁴ La falta de concreción de las obras provoca una manifestación de los vecinos, en miles de autos, protestando con el argumento de que el futuro socio-económico de la región se pone en juego.

²⁵ El camino uniría General Roca directamente con El Chocón y, a través del empalme con la Ruta 237, con Bariloche (*Río Negro*, 1969: 6). En Bariloche, en 1970, se designa a una figura “extraña” al ámbito local como comisionado municipal; el pueblo sale a la calle, se moviliza distribuyendo panfletos que rechazan el nombramiento y pide en su lugar a un vecino interiorizado de los intereses locales.

²⁶ Durante el desarrollo de las acciones que dan cuerpo al movimiento de protesta social se produce la participación de sectores subordinados, motivados por intereses y discursos diferentes pero, con un elemento unificador: *la confrontación con el gobierno de turno en el contexto provincial*. El denominado Rocazo expresa una instancia de la crisis política subyacente bajo la contenida superficie del período de gobiernos no constitucionales, que rápidamente se convierte en revuelta social.

²⁷ El tractorazo consiste en una acción de los propietarios-productores que atraviesan con los tractores la Ruta 22 y cortan los accesos a las localidades valletanas, impidiendo la circulación de los medios de transporte a las localidades turísticas de la cordillera y en el verano también hacia la zona atlántica.

²⁸ En 1995 la producción local atraviesa una coyuntura favorable por los niveles alcanzados de producción y por la sostenida demanda de los mercados externos y los buenos precios internacionales. La asistencia a la producción con fondos compensadores, préstamos, declaraciones de emergencia agropecuaria, prórrogas impositivas, eliminación de impuestos a los ingresos brutos significan –para los años ‘94 y ‘95– 75 millones de pesos.

²⁹ Entre junio y septiembre los trabajadores estatales no cobran sus salarios ni el medio aguinaldo. La salud queda virtualmente paralizada, se atiende sólo mediante guardias e intervenciones quirúrgicas de urgencia (*Río Negro*, 1995a: 9).

³⁰ La distribución se realiza en forma descentralizada a través de los municipios y comisiones de fomento, y los fondos del programa lanzado en General Roca el 13 de marzo de 1992 proviene de programas nacionales.

³¹ Los fondos a Río Negro no provienen de un aporte fiduciario sino de operaciones inter-financieras en el mercado mundial. Durante el gobierno de Massaccesi se “enfuman” 500 millones de pesos de compensación de deudas que recibe de la nación en 1993. El Consejo Federal de Inversiones (CFI), al cual la provincia está ligada desde sus orígenes al igual que al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), acuerda con gobernadores someter a los ejecutivos provinciales a un menú de alternativas que tengan como fin el saldo de las acreencias que las mismas tienen sobre el gobierno central.

³² La organización sindical se aleja de los intereses de las bases sociales que la integra desde la década del ochenta tras la consecución de proyectos políticos individuales de algunos de sus dirigentes, para quienes la militancia gremial es el trampolín a la arena política provincial.

³³ En este caso, todo el proceso está sobredeterminado por las consecuencias del “efecto tequila”. Así se denomina a la crisis que se despliega durante los años 1994-1995 a partir de la crisis del sistema financiero mexicano. Para los países que dependen de los flujos internacionales de crédito, como la Argentina, la situación se vuelve dramática. Durante el año 1995 el PBI de nuestro país desciende casi un 3% y se teme por el descontrol de la economía. Finalmente, hacia la segunda mitad de ese año, la crisis comienza a ceder y la economía argentina, a un alto costo social, logra superar la situación.

³⁴ En el caso vitivinícola, el grueso de la producción se fracciona y embotella en la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), con la participación de agentes económicos localizados en esta área.

³⁵ Existe abundante bibliografía sobre las economías regionales y su crisis. Ver Rofman (2000).

³⁶ Todavía no están disponibles los datos referidos a la evolución de los trabajadores rurales para el Censo Agropecuario 2002.

³⁷ Corresponden a los Censos Nacionales Industrial y Económico, respectivamente. En el rubro citado, casi el 50% de la mano de obra ocupada corresponde al ítem “Elaboración de Vinos”.

³⁸ Este razonamiento se desarrolla en extenso en Cao (2003).

³⁹ El 27 de marzo de 1991, Menem-Cavallo, promulgan la Ley de Convertibilidad (23.928), que establece la relación Australes-Pesos-Dólares (A10.000= \$1= 1U\$). Se deroga en enero de 2002, por la Ley de Emergencia Pública y Régimen Cambiario que pone fin a la convertibilidad, estableciendo la devaluación de la moneda argentina.

⁴⁰ El bloquismo publica datos de encuestas de forma tal de evitar la polarización y dividir el voto opositor entre la UCR y el PJ. El candidato extrapartidario es Enrique Gómez Centurión, gobernador de la provincia durante la dictadura militar de los sesenta.

⁴¹ El ajuste es tal vez el más duro llevado a cabo por provincia alguna en esta etapa. A modo de ejemplo, y para dar una idea de su profundidad, el gasto en personal pasó de 437 millones de pesos en 1994 a 317 millones de pesos en 1996.

⁴² Esta puja supuestamente entre un sector *político* y otro *técnico* es relativamente común en los gobiernos provinciales de los noventa. Ver al respecto Cao y Rubins (1998).

⁴³ En donde el triunfo de Menem se traduce como un mandato para salvar la convertibilidad amenazada por el “efecto tequila”.

⁴⁴ En una reunión de gobernadores realizada en la Casa Rosada el 14 de julio, Mario Moine, gobernador de Entre Ríos, expresa: “Cavallo tiene que estar contento porque

estamos privatizando, bajamos los sueldos, le pasamos los jubilados. Pero en cualquier momento van a tener que mandar cuatro o cinco interventores provinciales, porque el costo político de esto es altísimo para los gobernadores” (Oficina de Prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 1995a).

⁴⁵ El descrédito en que cae el Banco San Juan por estos hechos opera en el sentido que casi no hay oposición a su total privatización.

⁴⁶ “Hemos visto por los canales de televisión local al Secretario General del Gremios [ATSA], el Señor Duarte, arengando en la puerta del edificio, mientras se tiraban elementos combustibles adentro del edificio para incentivar el fuego” (declaraciones del vicegobernador Cerdera a Interdiarios, 1995e).